

A.A. MIGUEL ÁNGEL FLORES RODRÍGUEZ

**GRUPO CAMILI. SOMOS LA AGENCIA ADUANAL
CON AUTORIZACIÓN 0001 EN MÉXICO**

ANÁLISIS JURÍDICO

REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS JURÍDICOS

CUEJ

M.R.

PARA ESPECIALISTAS, ENTRE ESPECIALISTAS

IMPORTANDO A MÉXICO Y EXPORTANDO AL MUNDO

Dr. Dante Jehová Cisneros García

**NORMAS ADMINISTRATIVAS CONTRA
NORMAS JURÍDICAS**

Dr. Raúl Miguel Arriaga Escobedo

**BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA REFORMA
POLÍTICA AL DISTRITO FEDERAL**

Lic. Rogelio Castillo Rosales

LA FELICIDAD COMO UN DERECHO HUMANO EN MÉXICO

Mtra. Dafne Rosales Rodríguez

 @RevistaCUEJ  /CUEJREVISTA

www.revistacuej.com.mx

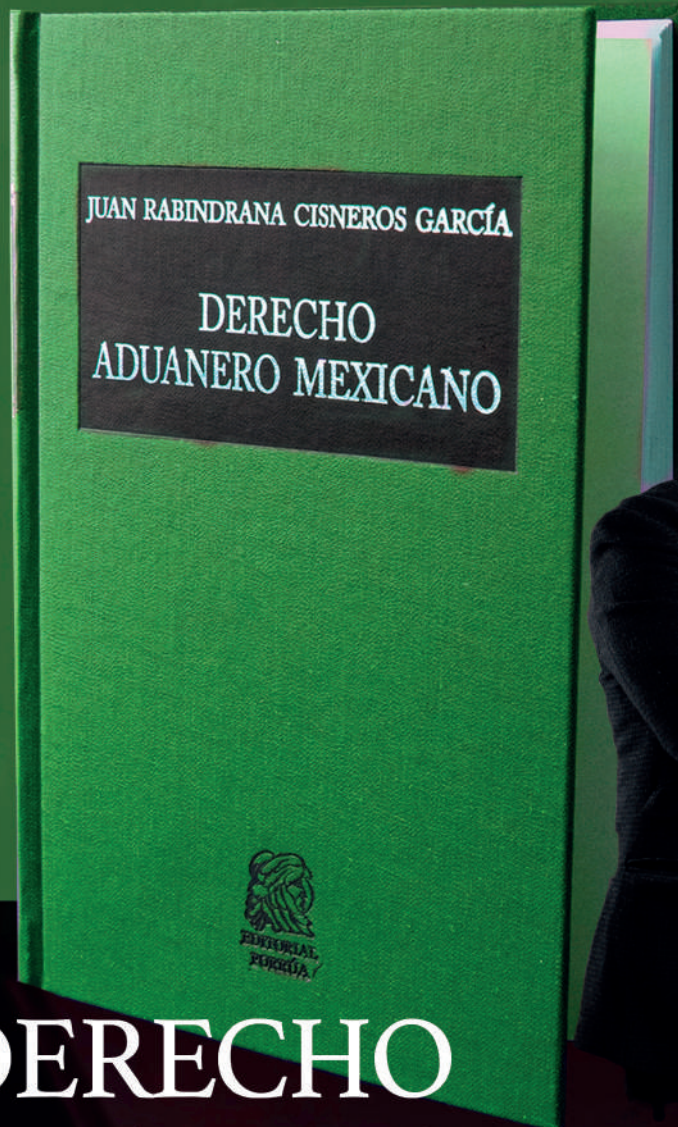
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

\$ 120.00

022



042016112313103600102



DERECHO ADUANERO MEXICANO

5ta. Edición

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García



EDITORIAL
PORRÚA

ecex
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

Contenido

- 05** **GRUPO CAMILI. SOMOS LA AGENCIA ADUANAL** CON AUTORIZACIÓN 0001 EN MÉXICO
A.A. Miguel Ángel Flores Rodríguez
- 08** RECONOCIMIENTO A.A. MIGUEL ÁNGEL FLORES RODRÍGUEZ
POR: Dr. Dante Jehová Cisneros García
- 10** **IMPORTANDO A MÉXICO** Y EXPORTANDO AL MUNDO
Dr. Dante Jehová Cisneros García
- 13** **AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE SIDERÚRGICOS: TODO LO QUE DEBES SABER**
L.C.I. Zurysaday Anteale Candelario
- 17** **LA FELICIDAD COMO UN DERECHO HUMANO EN MÉXICO**
Mtra. Dafne Rosales Rodríguez
- 20** **OPCIONES FISCALES PARA LOS INGRESOS POR HONORARIOS PROFESIONALES**
L.C. E.F. Mtro. Alfredo Jesús Vargas Cid del Prado
- 23** **NORMAS ADMINISTRATIVAS CONTRA NORMAS JURÍDICAS**
Dr. Raúl Miguel Arriaga Escobedo
- 27** **LA SERPIENTE Y EL ÁGUILA**
Dr. Víctor Amaury Simental Franco
- 31** **ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL "DESCUBRIMIENTO" DE AMÉRICA**
S. Sofía Cisneros Grosso
- 35** **ADUANAS MARÍTIMAS, SEGURIDAD NACIONAL Y TALASOPOLÍTICA, ENFOQUE ACTUAL**
Mtro. Armando Caballero Vázquez
- 41** **LOS NFT'S NEGOCIO CON MÚLTIPLES DERECHOS VULNERADOS**
Dr. Carlos Arturo Martínez Negrete
- 45** **PROCEDIMIENTO PARA DEJAR SIN EFECTOS LA RESTRICCIÓN DEL USO DE LOS CERTIFICADOS DE SELLO DIGITAL (CSD)**
Dr. Miguel García Vázquez
- 48** **FACILIDADES AL COMERCIO EXTERIOR. LA TASA GLOBAL DEL 19%. SU NATURALEZA JURÍDICA**
Mtro. Arnulfo Domingo Tovar Juárez
- 53** **BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA REFORMA POLÍTICA AL DISTRITO FEDERAL**
Lic. Rogelio Castillo Rosales
- 58** **MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LA MEDIACIÓN Y LA CONCILIACIÓN EN MATERIA FAMILIAR**
Lic. Catalina Mondragón Bibiano
- 62** **EL ACCESO A LAS TIC COMO DERECHO HUMANO Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN ACTUAL**
Mtro. Jorge Luis Barrera Vergara y, Mtra. María del Pilar Bolaños Rebollo
- 65** **LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MÉXICO Y SU RELACIÓN CON EL CICLO PRESUPUESTARIO**
Diego Alfonso Vázquez Pérez

DIRECTORIO

DIRECTOR GENERAL

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García

DIRECTOR DEL CONSEJO EDITORIAL

Dr. Dante Jehová Cisneros García

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Hadar Moreno Valdéz

Dr. Miguel Antonio Gutiérrez Güereca

Dr. Carlos Javier Verduzco Reina

Dra. Sara Esteban Cabrera

EDICIÓN Y ARTE

COORDINADORA DE ARTE

DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO

Lic. Liliana Andrade Gutiérrez

CORRECTORA DE ESTILO

Sandra Sofía Cisneros Grosso



DR. JUAN RABINDRANA CISNEROS GARCÍA
DR. CARLOS JAVIER VERDUZCO REINA



DERECHO PROCESAL FISCAL Y ADUANERO

RECURSO DE REVOCACIÓN Y JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL

Disponible en:
DIGITAL E IMPRESO

De venta en:
librosyrevistascuej.com

EDITORIAL

Hacia finales de este año 2022 tenemos la dicha de ofrecerles la presente edición de la Revista CUEJ, que corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre, meses de mucha alegría y en los cuales se presta la oportunidad para reflexionar sobre lo que ha acontecido en el transcurso del año. Afortunadamente, parece que dejaremos la pandemia atrás y por fin habremos superado la difícil crisis sanitaria que inició en 2020, la cual cambió por completo nuestras vidas y nuestras rutinas, obligándonos como especie a reconsiderar nuestros modos de convivir y habitar el mundo.

La pandemia nos dejó múltiples lecciones y tareas, algunas de ellas venían desarrollándose desde hace tiempo y otras surgieron o se derivaron del confinamiento. Sea uno u otro el caso, varios de nuestros autores han razonado en torno a temas que han adquirido gran presencia debido a nuestro contexto actual, como por ejemplo la tecnología y sus avances; pues es manifiesto que la virtualidad vino para quedarse y cada día surgen nuevos fenómenos en internet, los cuales es importante estudiar y sopesar. De este modo, se encuentran artículos que hablan sobre trámites virtuales, los Certificados de Sello Digital (CSD), los novedosos y controversiales activos digitales Non-Fungible Token (NFT) y, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su relación con el derecho a la educación.

Asimismo, se encontrarán reflexiones profundamente valiosas respecto a temas de distintas ramas del Derecho, como Fiscal, Aduanero, de Comercio Exterior, Derechos Humanos, entre otras. Al igual que cavilaciones notables sobre la situación actual del país en términos políticos, jurídicos y filosóficos. Siendo una amplia gama de temas fundamentales en la cual el lector seguramente podrá hallar gran interés para consultar.

En esta ocasión nos alegra dedicar la portada de la Revista al Agente Aduanal Miguel Ángel Flores Rodríguez con motivo de su destacada trayectoria en materia aduanera y en reconocimiento a su Agencia Aduanal Grupo Camili, la cual es la primera Agencia Aduanal autorizada por Aduanas y es el resultado de un gran esfuerzo y sobresaliente actividad como Agente Aduanal en Nuevo Laredo por más de 20 años. La actividad del A. A. Miguel Ángel es una enorme y loable contribución al comercio exterior en México y es una dicha para nosotros compartir el gran impacto que ha tenido en el desarrollo de esta disciplina.

Enhorabuena, esperamos que la presente edición sea de agrado y utilidad para el lector.

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García

Rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ)
Ciudad de México, octubre de 2022.

otorga el reconocimiento al

A.A. ING. MIGUEL ÁNGEL FLORES RODRÍGUEZ

como líder logístico en el comercio internacional



Forwarding, Inc.

En Grupo Camili nos importa apoyarte desde el exterior del país para un mejor servicio con nuestra bodega en Estados Unidos, ubicada en Laredo, Texas.

Unidades de Transfer

Confiables, seguras y puntuales, Grupo Camili cuenta con unidades dedicadas a los cruces internacionales de importación y exportación.

Transporte en carretera

Con una flotilla de 47 unidades y más de 90 cajas para brindar un servicio completo, con los siguientes departamentos: Despacho, Finanzas, Contabilidad y Mantenimiento de unidades.

Centro de Distribución

Con la finalidad de optimizar las operaciones de exportación, para el manejo de transbordos B1, distribución, carga y descarga, embalaje y etiquetado.



NÚMERO DE PATENTE 3751

Flogistics

Forwarding, Inc.

Centro de Distribución

División Transporte

Transfer

Camili Agencia Aduanal

camiligrupoaduanal

www.camili.com

Camili Agencia Aduanal

Grupo Camili, S.C.

Héroe de Nacataz 3802
Col. Ojo Caliente, 88040
Nuevo Laredo, Tamps.
Tel. 867 719 1909
Tel. 867 719 1934
Tel. 867 719 1964

Camili Forwarding INC.

301 Grand Central Blvd.
Laredo, Texas, 78045
Tel. 956 791 2668
Tel. 956 796 0638

Camili Centro de Distribución

Anáhuac #4305-A
Col. Ferrocarrilera, 88280
Nuevo Laredo, Tamps.
Tel. 867 715 7871

GRUPO CAMILI. SOMOS LA AGENCIA ADUANAL CON AUTORIZACIÓN 0001 EN MÉXICO

A.A. Miguel Ángel Flores Rodríguez



Ingeniero Industrial, Licenciado en Comercio Exterior y Agente Aduanal con 22 años de experiencia en materia aduanera, con trayectoria gremial. Director General y fundador de: Grupo Camili de México, S.A. de C.V., Grupo Camili, S.C., Inmobiliaria Ben Royale S.A. de C.V., Camili Forwarding, INC., Corporativos Villas S.A. de C.V., Villas De Santander Homes LLC, Camili Servicios Aduanales y Transportes S.C., FLogistics Inc., Flogistics Express Inc. T Cedis Log S.A. de C.V.

Tras casi 23 años de trabajo y perseverancia constante, en Grupo Camili nos sentimos comprometidos al ser la Agencia Aduanal con número de autorización 0001 y seguiremos refrendando nuestro compromiso día a día con los operadores del comercio exterior mexicano.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de junio de 2018, insertó la figura de la Agencia Aduanal, definiéndola como la persona moral autorizada por la Agencia Nacional de Aduanas de México para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en Ley.

Para obtener la autorización como Agencia Aduanal, la persona moral debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar constituida como sociedad civil, conforme a las leyes mexicanas y con cláusula de exclusión de extranjeros.
- Señalar en su acta constitutiva como objeto social la prestación de los servicios del despacho aduanero de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros.
- Estar conformada por ciudadanos mexicanos y, al menos, por un agente aduanal que no se encuentre sujeto a algún procedimiento de inhabilitación de que sea titular.
- Incluir en sus estatutos sociales, mecanismos encaminados a establecer mejores prácticas corporativas que contribuyan a un eficiente funcionamiento de sus órganos de administración.
- Vigilar la operación de la sociedad para asegurar el debido cumplimiento de la normatividad.
- Mantener los procesos que permitan contar con una debida transparencia en la administración mediante el manejo responsable de la información financiera y la comunicación entre los socios.

- Implementar mecanismos para la identificación, administración y control de riesgos.
- La emisión de un Código de Ética que deba observar los integrantes de la sociedad.
- Contar con un procedimiento que contribuya a la continuidad de la sociedad y de los servicios especializados.
- Asegurar que el modelo de gobierno de la sociedad contribuya al adecuado y cabal cumplimiento de su objeto social.
- Contar con solvencia económica, capacidad técnica y administrativa para prestar los servicios del despacho aduanero de mercancías.
- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
- Contar con los medios de cómputo y transmisión de datos enlazados con el sistema electrónico aduanero.

Esta autorización permite a la Agencia Aduanal realizar por cuenta de terceros el despacho aduanero de mercancías en las aduanas que tenga autorizadas para operar él o los agentes aduanales que integran la sociedad, con la oportunidad y derecho para solicitar la actuación en aduanas adicionales, siempre y cuando se demuestre el plan de negocio y la capacidad técnica, administrativa y financiera necesaria para llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías.

“ El 14 de octubre de 2021, se nos otorgó la autorización de Agencia Aduanal a la sociedad “Camili Servicios Aduanales y Transporte, S.C.” Convirtiéndonos en ser el primer Agente Aduanal en migrar a la figura de Agencia Aduanal, con número de autorización 0001 de la República Mexicana. ”

Así, una vez cumplidos estos requisitos y bajo aprobación, la Agencia Nacional de Aduanas de México otorgará el registro y autorización a la persona moral solicitante que cuente con al menos un socio titular de una Patente Aduanal al cual le será desactivada su patente del sistema electrónico aduanero, para dar cabida y sustento a la autorización, pudiendo en todo caso incorporar a cuantos socios titulares de patente aduanal deseen formar parte de la sociedad, siguiendo el mismo procedimiento de desactivación de su patente.



1ER CONGRESO INTERNACIONAL: **DERECHO COMPARADO EN MADRID, ESPAÑA**

México - Unión Europea

sobre Materia Aduanera, Fiscal, Marítimo,
Penal, Civil y Constitucional

08 y 09 Diciembre 2022

**I Congreso Internacional de DERECHO COMPARADO:
MÉXICO-COSTA RICA-UNIÓN EUROPEA en Madrid, España.**

La globalización obliga al profesionalista de hoy, sobre todo a los que ostentan estudios de posgrado a conocer los sistemas jurídicos de otros países a fin de buscar el perfeccionamiento de sus normas, principios e instituciones. El derecho comparado permite conocer estas diferencias y similitudes; abrir la mente del profesionalista con una mirada hacia otras sociedades a fin de poder observar su orden, estructura y funcionamiento.

SEDE

Hotel Pestana CR7, Gran Vía. Ubicado en calle Gran Vía, 29, 28013 en Madrid, España. El hotel sede está ubicado en la Gran Vía, una de las principales avenidas del centro de Madrid.

FECHAS

8 y 9 de diciembre de 2022.

Jueves 8 de diciembre de 8:45 a 20:00 horas

Viernes 9 de diciembre de 9:45 a 18:00 horas

Para mayor información

Mtra. Fabiola Flores
Vicepresidenta del Colegio

Cel. 5514917033

www.colegionacionaldeprofesionistas.mx

Reconocimiento

Al Agente Aduanal

Ing. Miguel Ángel Flores Rodríguez

La Revista de Investigación y Estudios Jurídicos CUEJ reconoce la vida y trayectoria del Ingeniero Miguel Ángel Flores Rodríguez, actor del comercio exterior, quien con 25 años de trayectoria se siente satisfecho por sus logros al ser el primer Agente Aduanal en tener la autorización 0001 para fungir como Agencia Aduanal dentro del territorio nacional.

Desde la Universidad, en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, se ha caracterizado en mantener interés en equipos de liderazgo logrando ser Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial, incluso aquel Instituto inauguró el Laboratorio de ingenieros a su nombre y, la LULAC Texas – The League of United Latin American Citizens – le otorgó el reconocimiento en el 2010 como “Empresario Distinguido”.

Pero no sólo es Ingeniero Industrial, sino que también cuenta con la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas por la Secretaría de Educación Pública, Maestría en Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ha sido Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Colombia, Nuevo León, Presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Nuevo Laredo, miembro activo del COMCE organismo del sector privado en comercio internacional en la Ciudad de Laredo, Texas, así como del Consejo de Presidentes de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana.

Lo que ha trabajado y recibido lo ha retribuido a la comunidad en diversas formas. Una de ellas es apoyando su deporte favorito, el béisbol del cual refiere en todo momento “la vida es como el béisbol, hay que saber trabajar en equipo” y su mejor equipo “la familia”; con la cual siempre está apoyando a los sectores más vulnerables de la población laredana desde hace ya varios años.

Firme en sus convicciones, el Agente Aduanal Miguel Ángel Flores Rodríguez sigue apostando por el crecimiento del comercio exterior a nivel internacional y de su parte lograr una mejor logística donde todos puedan ganar.

“ Se necesita vocación y pasión en una Agencia Aduanal porque esto es adrenalina pura ”

A.A. Miguel Ángel Flores Rodríguez.

Dr. Dante J. Cisneros García

Director del Consejo Editorial
Ciudad de México, Octubre de 2022





IMPORTANDO A MÉXICO Y EXPORTANDO AL MUNDO

Dr. Dante Jehová Cisneros García

Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Penal. Técnico en Tráfico y Tramitación Aduanera, Maestro en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, Doctor en Derecho y postulante como Doctor en Derecho Aduanero y Comercio Exterior, actualmente estudiante de la Maestría en Derecho Marítimo y Portuario. Director y Catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ), de la Escuela de Comercio Exterior y Aduanas (ECEX), así como CEO de Grupo DACIS "Dacis Agencia Aduanal, S.C.", "Dacis Almacenaje, S.A. de C.V.", "Dacis Soluciones, S.A. de C.V.", y "Dacis Autotransportes, S.A. de C.V.". Miembro de la Academia Internacional de Codificación Arancelaria de las Mercancías, A.C., del Comité Técnico de Normalización Nacional de Bebidas Alcohólicas y del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, A.C.

En el desarrollo de mi vida profesional y laboral en la materia aduanera y del comercio exterior, ya sea como estudiante, como catedrático en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ), en la Escuela de Comercio Exterior y Aduanas (ECEX), o bien, como Agente Aduanal sustituto en DACIS Agencia Aduanal, S.C., he podido escuchar con gran frecuencia dos preguntas que a simple vista parecen sencillas de responder ¿Cómo puedo importar? o ¿Cómo puedo exportar determinada mercancía? y, sencillamente la respuesta no es nada fácil de contestar, así como el tiempo que se lleva para responder a tan amplias preguntas tampoco es suficiente, ello simplemente por el hecho de que una sola respuesta no es suficiente para responder de forma completa, certera y adecuada, pues las respuestas que se deben de dar son múltiples debido a que tanto la importación como la exportación de mercancías implican múltiples procesos y procedimientos aduaneros y de comercio exterior.

Dentro de la obra *Importando a México y Exportando al Mundo* pretendo dar las respuestas pertinentes y suficientes a las preguntas antes planteadas de una manera breve, sencilla, estructurada y sistemática, pero a la vez de una forma clara y precisa tanto para los estudiantes como para los diversos actores y operadores del comercio internacional, el comercio

exterior y las aduanas que estén interesados en aprender y practicar sobre estas materias.

Así como mediante el desarrollo de diez capítulos organizados de una forma sistémica y pragmática se puedan ir dando respuestas ordenadas y claras para conocer, paso a paso, cómo se debe de ir tramitando, gestionando y actuando conforme a las leyes y los tratados internacionales en todo el desarrollo de una importación a México o una exportación a cualquier parte del mundo de una mercancía de comercio exterior.

En el primer capítulo se exponen los aspectos relacionados con la globalización comercial y la integración económica cuyos fenómenos han traído consigo importantes cambios en el desarrollo de las economías de los países a nivel mundial, máxime en el comercio internacional, el comercio exterior y en las aduanas, pues ha sido el libre comercio el gran catalizador que ha permitido que los países mediante diversas negociaciones multilaterales ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) o mediante la creación de zonas de libre comercio, uniones aduaneras y otras formas de integración económica, logren generar beneficios mutuos y un mayor intercambio de mercancías mediante las importaciones y exportaciones que se gestan en las aduanas y se ven reflejadas respectivamente en las balanzas comer-

ciales de cada país; en este sentido, ningún país puede sustraerse ya de los diversos beneficios que le brinda el comercio internacional.

En el capítulo segundo se expone y analiza tanto el marco jurídico del comercio internacional, como del comercio exterior y las aduanas, ya que la experiencia laboral me ha enseñado que conocer las leyes y los tratados internacionales nos permite actuar con mayor seguridad y certeza jurídica en las operaciones de importación y exportación, pero también evita hacernos acreedores a sanciones, multas y hasta evitar la comisión de algún delito de contrabando, defraudación, subvaluación o lavado de dinero, que pone en riesgo no solamente a las empresas de comercio exterior, sino también nuestra labor como despachantes de aduanas.

Para que la empresa logre el éxito comercial esperado es necesario que cuente con un producto adecuado que sea potencialmente exportable y convenientemente importable si lo requiere como materia prima o insumo para llevar a cabo sus procesos productivos, pues tanto las importaciones como las exportaciones juegan un ciclo interminable en la producción, comercialización, distribución y el consumo de las mercancías de comercio exterior; para lo cual es indispensable que las empresas hagan un importante estudio de mercado que les permita conocer cuáles son las ventajas y desventajas que tendrá su producto en el mercado internacional, cuáles son las barreras u obstáculos a los que se puede enfrentar en el país de destino y, para ello en el capítulo tercero de la obra se abordan las características y requisitos con los cuales debe de contar la empresa de comercio exterior, además de conocer cuáles serán las ventajas y desventajas al momento de insertarse en su proceso de internacionalización.

Antes de realizar cualquier trámite de importación o exportación resulta totalmente necesario realizar una investigación de mercado, saber las características comerciales y clasificar arancelariamente las mercancías con la finalidad de saber con precisión cuáles serán los aranceles a pagar y cuáles serán las medidas de regulación y restricción no arancelarias a cumplir; entre las que se encuentran el país de origen que resulta igualmente de primera importancia para conocer si dicha mercancía se hará acreedora a alguna preferencia arancelaria derivada de los tratados internacionales de libre comercio. También será importan-

te conocer el canal o los canales de distribución/comercialización apropiada al producto y a las capacidades financieras y organizativas de la empresa, así que de ello me ocupo en el capítulo cuarto que está relacionado en términos generales con la preparación que debe de tener el producto/mercancía de comercio exterior para su internacionalización.

El quinto capítulo se relaciona con la promoción del producto, lo cual corresponde con su gestión de venta en el mercado meta que, a su vez, requiere de cuatro tareas fundamentales, a saber: la promoción de las exportaciones mediante ferias, misiones comerciales, envío de muestras, etc.; el fomento del comercio exterior a través de programas de promoción, apoyo y mediante distintas instituciones gubernamentales; la negociación internacional que consiste en determinar el precio de exportación, especificar el Incoterms, el transporte internacional y el seguro, etc., y finalmente la contratación internacional que radica en realizar el contrato de compraventa internacional de mercaderías.

Aunado a ello, conocer los elementos fundamentales que componen la logística comercial internacional y que se relaciona con el proceso de planear, implementar y controlar los diversos procedimientos para la transportación, el empaque, el embalaje, la estiba, el trincado, el almacenaje y otros elementos que permiten que la mercancía se desplace de un país de origen a un punto de destino con los menores costos, riesgos y contratiempos posibles, es el objetivo a desarrollar en el capítulo sexto del libro.

El capítulo séptimo nos remite a los actos previos al despacho aduanero de mercancías, los cuales son necesarios llevar a cabo antes de presentar dichas mercancías a la autoridad aduanera para su despacho aduanero a la importación o la exportación. Es decir, estos actos previos se deben de cumplir desde la entrada al territorio nacional o la salida del mismo. Para lo cual la Ley Aduanera y su reglamento mandatan que sea por lugares autorizados, para quedar en depósito ante la aduana en un recinto fiscal o fiscalizado, donde se podrán destinar a un régimen aduanero que se especificará en el pedimento aduanal, el cual será requisitado, prevalidado y validado ante el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI) de la autoridad aduanera por conducto del Agente Aduanal o la Agencia Aduanal, quien habiendo recibido el encargo conferido y la documentación que se acom-

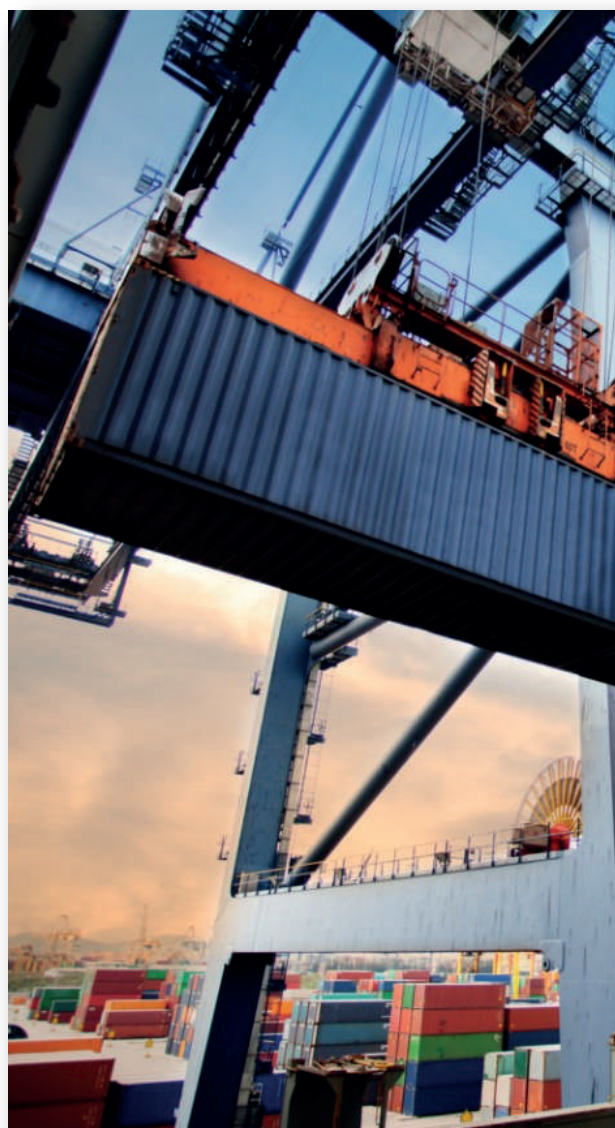
pañará anexa al pedimento, determinarán y pagarán los impuestos y contribuciones, además de cumplir con las medidas de regulación y restricción no arancelarias para posteriormente poder someter las mercancías al despacho aduanero.

De igual forma resulta necesario e indispensable conocer los muy diversos documentos y trámites necesarios para el despacho aduanero de las mercancías, por lo cual en el capítulo octavo doy a conocer los documentos nacionales e internacionales en materia aduanera y de comercio exterior, con la finalidad de que se conozcan sus características estructurales, sintácticas y demás elementos que los componen; así como también los diversos trámites que resulta de gran relevancia conocer, porque es a partir de ello como los actores y los operadores aduaneros y de comercio exterior pueden actuar de forma correcta para poder llevar a cabo y de conformidad con la legislación aduanera y de comercio exterior el despacho aduanero de mercancías.

Así es que conociendo los actos previos, la documentación y la tramitación necesarios para el despacho aduanero, es como en el capítulo noveno se procede a hacer el estudio y análisis pormenorizado del despacho aduanero de las mercancías de comercio exterior, el cual constituye el procedimiento más importante para poder importar o exportar las mercancías y, se conforma por todo un conjunto de actos y formalidades orientadas a controlar el ingreso al territorio nacional y la salida del mismo de dichas mercancías, así como también de su tránsito por el territorio nacional. Dicho procedimiento debe de llevarse ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen las mercancías del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en la importación y remitentes en la exportación, así como los agentes aduanales o agencias aduanales. Y como resultado del despacho aduanero es probable que se pueda iniciar alguno de los procedimientos administrativos establecidos por la Ley Aduanera como lo son el Procedimiento Aduanero en Materia Aduanera (PAMA) y el Procedimiento de Omisión de Contribuciones (PACO).

Finalmente, en el capítulo diez se hace el estudio y el análisis de la importante institución del Agente y la Agencia Aduanal, la cual resulta fundamental para llevar a cabo el despacho aduanero de las mercancías, tal como lo manda la propia Ley Aduanera. Esta institución juega un papel multifuncional para poder llevar a cabo la importación y la exportación de las

mercancías, ya que dicha función no se constriñe únicamente al despacho aduanero, sino que también guarda un papel muy importante de acompañamiento de los importadores y exportadores en todo el proceso de su logística comercial internacional; es decir, en la mayoría de los casos asesoran a los importadores y exportadores en materia de clasificación arancelaria, origen, valor y el cumplimiento de medidas de regulación y restricción no arancelaria, constituyéndose así como controladores y coadyuvantes de la legalidad junto con las autoridades aduaneras, evitando también que los actores y operadores puedan hacerse acreedores a fuertes infracciones y sanciones, o caer en la comisión de algún delito.



AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE SIDERÚRGICOS: TODO LO QUE DEBES SABER



L.C.I. Zurysaday Ante Candelario

Licenciada en Comercialización Internacional por la Escuela Superior de Comercio Internacional; especialista en tráfico y tramitación de mercancías por la Escuela de Tráfico y Tramitación Aduanal. Actualmente estudia la Maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Destacan sus más de 10 años de experiencia en tráfico de mercancías y consultoría de trámites en materia aduanera y comercio exterior.

En los últimos años, el sector siderúrgico mexicano ha presentado considerables aumentos en las importaciones de acero, especialmente el de origen chino, esto ha traído como consecuencia una competencia desleal para los productores nacionales.

Debido a lo anterior, la autoridad aduanera obliga a todos los importadores del sector siderúrgico que vayan a destinar dichos productos al régimen definitivo al cumplimiento de dos grandes regulaciones, la primera estar inscritos en un Padrón de Sectores Específicos y la segunda tramitar un Aviso Automático de Importación.

El padrón sectorial es un registro administrativo adicional de carácter obligatorio al padrón de importadores y el aviso automático fue creado con la finalidad de llevar un registro de las operaciones de comercio exterior, así como una medida no arancelaria que protege la industria nacional; estos dos requisitos mencionados, convierten a las importaciones de productos de este sector, como una actividad muy restringida, controlada y especializada, consideradas como operaciones sensibles.

El presente artículo tiene como finalidad realizar un análisis en torno a las solicitudes de Avisos Automáticos de Importación de Productos Siderúrgicos, desta-

cando todos los puntos a considerar en el trámite de las solicitudes ante la Secretaría de Economía.

¿QUÉ ES UN AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS?

Los avisos automáticos tienen la calidad de trámite de licencias conforme al **“Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación”** de la OMC, el cual es considerado como un procedimiento administrativo, como condición previa para efectuar la importación en el territorio aduanero del importador.¹

Actualmente, se encuentran sujetas al cumplimiento del aviso automático fracciones arancelarias de los capítulos 72 y 73 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, por ello es importante que si tú o tu empresa está interesada en importar este tipo de mercancía observen todos los requisitos para obtener una importación fluida y sin contratiempos.

¿CUÁNDO APLICA EL AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS?

El aviso automático de importación sólo se aplicará a las importaciones definitivas de productos com-

¹ Cfr. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/23-lic_s.htm

prendidos en el numeral 8, fracción II del Anexo 2.2.1 “Permisos Previos” de las Reglas y Criterios de la Secretaría de Economía; sin embargo, si la mercancía exceptuó el aviso automático derivado de una importación temporal, este deberá aplicarse cuando hay un cambio de régimen a importación definitiva.

RECOMENDACIONES PARA LA SOLICITUD DE AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

Lo primero a considerar para realizar el trámite de la solicitud es que la Secretaría de Economía exige dos tipos de certificados, dependiendo de la fracción arancelaria, por lo que antes de iniciar con el trámite es importante que se tenga la correcta clasificación de los productos.

TIPOS DE CERTIFICADOS:

- Certificado de molino para las mercancías que se clasifican en las fracciones arancelarias comprendidas en las partidas 7207 a 7304. La regla 2.2.19² señala que el certificado de molino es el documento expedido por el molino que acredita la empresa que produjo el acero.
- Certificado de calidad y molino para las mercancías que se clasifican en las fracciones arancelarias comprendidas en las partidas 7202 y de la 7305 a la 7317. Se entiende como certificado de calidad al documento emitido y avalado por el fabricante de la mercancía a importar.

Los certificados de molino o calidad deberán estar expedidos, como máximo, tres años antes de la fecha de presentación del aviso y en caso de que se encuentren en un idioma distinto del inglés o español se deberá anexar una traducción libre del mismo.

El Certificado de molino o de calidad debe contener los campos que se indican a continuación:

- Descripción detallada de las mercancías que ampara dicho certificado.
- País de origen de las mercancías. En caso de que el certificado de molino o de calidad no especifique el país de origen de la mercancía a importar, se tendrá por cumplido este dato, siempre que contenga el domicilio completo de la empresa productora o fabricante.
- Nombre y datos de contacto de la empresa productora o fabricante de las mercancías (dirección, teléfono y, en su caso, correo electrónico).
- Número de certificado. En caso de que el certificado de molino o de calidad no contenga expresamente el número de certificado, se tendrá por cumplido este dato siempre que contenga el número de colada, o el número de embarque, o el número de folio, o el número de orden.
- Fecha de expedición.
- Volumen de las mercancías.
- Firma autógrafa o código QR.

Los siguientes datos no son obligatorios que vengan en los certificados de molino o calidad, pero debemos solicitarlos al proveedor para el correcto llenado de la solicitud:

- Tipo de acero.
- Tipo de recubrimiento.
- Tipo de acabado.
- Accesorios agregados al producto.
- Clave de identificación del producto de acuerdo a las normas internacionales.

² Reglas y criterios de la Secretaría de Economía 2022.

- Elementos químicos y porcentaje de los mismos que conforman el producto a importar.
- Presentación del producto.
- Dimensiones.

Teniendo la información mencionada anteriormente se podrá realizar la gestión del aviso automático. Para esto, se deberá presentar un aviso por fracción arancelaria, por país de origen o procedencia, por precio unitario y por certificado de molino o de calidad, sin que se excluya la posibilidad de que un certificado pueda ser utilizado en distintos avisos, siempre y cuando del conjunto de avisos correspondientes, no se exceda el monto que ampare dicho certificado, el valor y precio unitario contenidos en el aviso deberá coincidir con la factura comercial que ampare la importación, de lo contrario el permiso carecerá de validez. El precio unitario deberá declararse en el campo de “descripción de la mercancía”.³

El importador puede presentar el Aviso de importación a través de la Ventanilla Digital (VUCEM), una vez ingresada la solicitud por medio de la Ventanilla Digital, el solicitante obtendrá de manera inmediata un acuse de recibo del aviso automático y de dos a tres días hábiles después deberá notificarse la clave asignada por la Secretaría de Economía, los avisos automáticos de importación tendrán una vigencia de cuatro meses a partir de que la SE haya asignado la clave de autorización correspondiente.

CONCLUSIÓN

Como podemos notar, derivado de las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al ingreso de mercancías siderúrgicas, se pueden producir sobrecostos hasta por un 15% del valor original de compra al no tener las autorizaciones correspondientes al momento del ingreso de la mercancía a territorio nacional, lo que conlleva para las empresas el pago de almacenajes y demoras, por eso es importante que cualquier especialista de comercio exterior tenga un claro conocimiento en los trámites que conllevan la importación de productos siderúrgicos para su correcta aplicación.



³ Conforme a la reforma de la regla 2.2.15 de las RGCE y el oficio 414.2019.4260 de la DGFCCE.



Incluye **códigos QR** con **formatos descargables** y **vídeos** de apoyo al lector.

CUEJ
CENTRO UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS JURÍDICOS



Derechos Humanos y Amparo

en Materia Administrativa

2da. Edición

LA FELICIDAD COMO UN DERECHO HUMANO EN MÉXICO

Mtra. Dafne Rosales Rodríguez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, Maestra en Derecho Constitucional egresada del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Se ha desempeñado en áreas jurídicas como abogada de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas N°5 en pensiones del ISSSTE, actualmente se desarrolla en el puesto auxiliar jurídico, realizando el seguimiento de las Acciones de Inconstitucionalidad, Contradicción de Tesis y Controversias en materia electoral, así como coadyuvando en la edición del proceso de elaboración de Sentencias Relevantes de Cortes Extranjeras, en la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



“La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía.”

Mahatma Gandhi

Este artículo tiene como propósito hacer un análisis de retrospección respecto al derecho a la felicidad, el cual se encuentra como primer antecedente en la Declaración de Virginia, considerado el documento que recogió el derecho a la búsqueda de ella.

De igual manera, se analizará como parte de un derecho fundamental de tercera generación. Lo anterior porque si bien, es cierto el objetivo de cada persona es tratar de encontrar ese bienestar. Sin embargo, es necesario realizar un estudio de la importancia donde el Estado deba reconocer y garantizar el derecho a la felicidad para todos los ciudadanos mexicanos.

Si ponemos la premisa de que los derechos son la pieza fundamental en la construcción en la que cada uno pueda contar con las herramientas y condiciones equitativas para poder forjar su propio bienestar, ¿será que la felicidad depende sólo de uno mismo?, o, ¿será que existe un ente llamado Estado, el cual debe ayudar en la obtención de ella?

El 12 de junio de 1776, se reconoció este derecho en la “Declaración de Derechos del Buen Pueblo de

Virginia”, considerada la primera declaración de derechos humanos de la historia, que recogió el argumento de derecho tanto a la búsqueda como a la obtención de la felicidad.¹

Otro ejemplo es la “Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América”, el 4 de julio de 1776, misma que no garantizó la obtención del derecho a la felicidad. Sin embargo, empleó la “Declaración de Virginia”, que fue dirigida en la búsqueda de ese derecho considerada un derecho inalienable de toda persona.

En la obra *Autobiografía de un Hombre Feliz de Benjamín Franklin*, conocido por ser uno de los promotores de la independencia de los Estados Unidos y uno de los más grandes estadistas del país, afirmó que el camino a una vida productiva llena de felicidad y de éxito se alcanza cuando logramos que nuestras acciones sean afines con nuestros valores y principios.

Por otro lado, el 22 de octubre de 1814 en la Constitución de Apatzingán², basada en la Constitución de

¹ Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, 1776, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, (1-2).

Cádiz que preveía la instauración de un régimen republicano, estableció en su Capítulo II, artículo 4° “De la soberanía” lo siguiente:

“ Como el Gobierno no se instituye por honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, éstos tienen derecho incontestable a establecer el Gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. ”

En el Capítulo V, artículo 24, titulado “De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos”, estableció que: “La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos, y el único fin de las asociaciones políticas”.

El 29 de diciembre de 1836 en “Las Siete Leyes Constitucionales” se plasmó con la particularidad en la que reconoció los derechos fundamentales que asoció la idea de felicidad con la presencia de una institución encargada de preservar el equilibrio entre los órganos del poder.

El 19 de julio de 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó³ el “derecho a la felicidad” de manera fundamental, por lo que exhortó a los Estados miembros a que diseñen y construyan políticas públicas eficientes, incluyentes e igualitarias que garanticen ese derecho a los ciudadanos.

Un año después, la Asamblea General de la ONU decretó al 20 de marzo “Día Internacional de la Felicidad”. Por otra parte, se encuentra el dato del derecho comparado, en los países de Japón, Corea del Sur y Brasil tienen contemplado ese derecho en su ley fundamental.

DERECHO DE LA TERCERA GENERACIÓN

Cabe resaltar que no existe una definición o concepto de felicidad, ya que difiere para cada persona, pues depende de diversos factores sociales y culturales, que hace que esa búsqueda sea diversa para cada individuo. Por otra parte, lo que debe hacer el derecho es facilitarles la vida a las personas ayudando a desarrollar su propio proyecto de vida, más no complicándoselo. ¿Cómo preservar el derecho a la felicidad? A través de acciones colectivas, sociales y positivas para buscar y reconocer la subsistencia implícita como principio de derecho humano, para que sea efectiva la fuerza del Estado sin que haya exclusión de permanencia en la vida de las personas.

Este derecho implica un debate del progreso moral, jurídico y político que traspase las nuevas fronteras, con la finalidad de garantizar una buena calidad de vida para las personas, ya que, por su naturaleza de institución política, el Estado es quien puede promover y proveer los derechos, bajo esa comprensión ir impulsando el derecho a la felicidad con un fin común.

RECONOCIMIENTO EN LA LEY SUPREMA

Es importante expresar que este derecho se encuentra implícito por el simple hecho de estar vivos. Sin embargo, es preciso que se vea positivado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como derecho fundamental, para que así tenga la fuerza y el alcance de que sea garantizado en los tres poderes de gobierno en favor de todas las personas. Por ello, el Estado debe adicionarlo y así continuar generando los medios y condiciones para procurarla.

Por lo anterior, esto es una prueba histórica de derecho fundamental en documentos jurídicos de los Estados Unidos de América, Francia y México; su reconocimiento en el siglo XXI por la ONU demuestra la importancia y vigencia, en la que los estados democráticos deben reconocer y garantizar los derechos a los ciudadanos.

² REMOLINA ROQUEÑÍ, Felipe, *La Constitución de Apatzingán. Estudio Jurídico Histórico*, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014, pp. 224-255.

³ LORCA M., María Isabel, “Sobre la felicidad. Estudio Filosófico y de Derecho Comparado”, en *Lex – Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política*, Vol. 15, Núm. 20, 2017, p. 141.

Por tanto, el derecho a regular las actividades de la familia, tanto en lo individual como en lo colectivo, tendría que garantizar el acceso a la felicidad de manera primordial que sea el parámetro inicial de toda ley en favor de las familias y de los habitantes del Estado mexicano, tal y como lo establece la Organización de las Naciones Unidas.

Lo cierto es que la sociedad va evolucionando con el paso del tiempo y por tanto los derechos humanos deben ser progresivos con base en el derecho constitucional, el cual hace referencia a la materialización de la dignidad humana. El principio de progresividad es de autopreservación, pues busca evitar que se deje de aplicar y por ende caiga en la obsolescencia.

Por lo anteriormente expuesto, existieron antecedentes con el fundamento en diversos documentos jurídicos, donde la finalidad de plasmar este concepto era promover el bienestar y la satisfacción de la vida de los ciudadanos, como objeto primordial de cualquier gobierno.

Actualmente, en México existe desafortunadamente demasiada inseguridad, violencia, corrupción, desigualdad, desempleo y empleo mal remunerado, falta de recursos en los hospitales, sobre todo medicamentos para las personas que se encuentran con enfermedades crónico-degenerativas o en estado terminal. Es difícil pensar en la felicidad cuando se está observando que en nuestro gobierno existen carencias, las cuales hacen imposible encontrar más fácilmente esa búsqueda de bienestar, siendo que el Estado está obligado a cumplir y garantizar

todos esos derechos humanos que están plasmados en la constitución.

No podemos conformarnos con las arbitrariedades del gobierno que la cuarta transformación ofrece, tenemos que enseñar a las futuras generaciones a tener aspiraciones en la vida, brindar educación con efectos constructivos como sociedad. Tampoco debemos permitir que se tenga a la ciudadanía en la ignorancia y en la zona de confort. ¿Cómo vamos a lograr crear una sociedad libre de violencia y corrupción si no empezamos a basar nuestros ideales con educación y valores que se inculcan en la familia?

Quiero enfatizar que mucho depende de la empatía de las personas, tenemos que empezar principalmente a respetar a los demás y estar conscientes de que esta sociedad debe ir evolucionando a nivel social, cultural, político y sobre todo en los derechos del hombre. Tenemos de ejemplo la discriminación a las personas afrodescendientes que son maltratadas y excluidas por sus ideologías y color de piel, personas con discapacidad, comunidades indígenas y LGBTQTTTQA+, etc.

No obstante, queridos lectores, esta es nuestra sociedad, pero a pesar de todas esas insuficiencias, deseo que todos podamos encontrar la felicidad, tenemos un largo camino por recorrer y falta mucho por hacer para lograr de México un país mejor. El derecho a la felicidad no puede quedar sólo como proyecto de iniciativa⁴, sino que debe verse reflejado en la carta magna y, así, buscar mayor ética, moralidad, igualdad, inclusión, para el bienestar de México.



⁴ Propuesta de Iniciativa que Adiciona el artículo 1° de la CPEUM, a cargo del Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del antiguo Grupo Parlamentario del PES, desechada el 30 de septiembre 2019.



OPCIONES FISCALES PARA LOS INGRESOS POR HONORARIOS PROFESIONALES

L.C. E.F. Mtro. Alfredo Jesús Vargas Cid del Prado

Licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y E.F. por la División de Posgrado de la misma Facultad. Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo egresado del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ). Expositor de temas fiscales y catedrático a nivel Licenciatura. Estudiante de la Licenciatura en Derecho (CUEJ).

El artículo quinto en su párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión que le acomode siempre que sea lícita.

Con base en lo anterior muchos contribuyentes que prestan un servicio profesional independiente obtienen ingresos derivados del ejercicio de su profesión, entendiendo este como la realización habitual a título oneroso de la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión.

Dichos contribuyentes al obtener los ingresos respectivos por sus servicios se obligan a contribuir al gasto público del Estado, tal y como lo impone el artículo 31 fracción IV de la Constitución. A fin de cumplir correctamente y con el menor impacto patrimonial con dicha obligación tributaria es importante que los profesionistas conozcan las distintas opciones que tienen para hacerlo. Las cuales son:

	Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	Asimilados a Salarios
ORIGEN	Contrato de servicios profesionales independientes	Contrato de servicios profesionales independientes	Contrato de servicios profesionales independientes <i>con cláusula de asimilación a salarios. En su caso carta de</i>

			<i>asimilación a salarios</i>
LÍMITE DE INGRESOS	No hay límite de ingresos	Ingresos efectivamente cobrados hasta 3.5 millones de pesos	No hay límite de ingresos
DEDUCCIONES AUTORIZADAS (MENSUALES) PARA ISR	Se permiten deducciones en gastos e inversiones	No se permite ningún tipo de deducción	No se permite ningún tipo de deducción
DEDUCCIONES PERSONALES PARA ISR (APLICADAS EN LA DECLARACIÓN ANUAL)	Se permiten las deducciones como gastos médicos, funerarios, intereses reales por créditos hipotecarios, donativos, primas por gastos médicos	No se permiten deducciones personales	Se permiten las deducciones como gastos médicos, funerarios, intereses reales por créditos hipotecarios, donativos, primas por gastos médicos
BASE PARA ISR	Utilidad fiscal (Ingresos efectivamente cobrados sobre deducciones efectivamente pagadas)	Ingresos efectivamente cobrados	Ingresos brutos recibidos del cliente
TASA DE ISR	Aplicación de tasas y tarifas. Dependiendo el importe de la utilidad la tasa de ISR podría ir del 1.92 al 35%	Tasa de aplicación directa sobre los ingresos cobrados (sin considerar deducciones) que puede ir del 1 al 2.5%	Aplicación de tasas y tarifas sobre los ingresos cobrados que puede ir del 1.92 al 35%

RET DE ISR	Servicios prestados a persona moral se retiene el 10% de los ingresos	Servicios prestados a persona moral se retiene el 1.25% de los ingresos	Servicios prestados a persona moral o a persona física con actividad empresarial aplicando tasas y tarifas
PAGOS PROVISIONALES	Auto determinados por el contribuyente	Auto determinados por el contribuyente	Determinados por el cliente
IVA	Ingresos objeto de IVA	Ingresos objeto de IVA	Ingresos NO objeto de IVA
DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT)	Obligado a presentar declaración informativa de IVA	NO obligado a presentar declaración informativa de IVA	NO obligado a presentar declaración informativa de IVA
RETENCION DE IVA	Servicios prestados a persona moral se retiene 2/3 partes del IVA cobrado (A aproximadamente 10.6666%)	Servicios prestados a persona moral se retiene 2/3 partes del IVA cobrado (A aproximadamente 10.6666%)	No se aplica retención de IVA

Es importante mencionar que aquellos profesionistas que se inclinen por el RESICO consideren que no pueden ser socios, accionistas o integrantes de personas morales.

La opción de asimilar a salarios los honorarios cobrados por los profesionistas se dará en los siguientes supuestos:

A) Cuando le preste servicios una persona moral a una persona física con actividad empresarial y lo solicite.

B) En el supuesto de que la persona física preste servicios preponderantes a un prestatario (se entiende por preponderante cuando representen más del 50% de los ingresos percibidos en el año de calendario inmediato anterior) y este se lleve a cabo en las instalaciones de este último.

Como se aprecia existe una terna de posibilidades respecto al régimen fiscal en que se podría ubicar el profesionista que recibe honorarios y la decisión que tome al elegir alguno(s) no sólo afectará al cálculo y la determinación de sus impuestos sino que lo llevará a cumplir o no con ciertas obligaciones fiscales.

NORMAS ADMINISTRATIVAS CONTRA NORMAS JURÍDICAS

Dr. Raúl Miguel Arriaga Escobedo

Licenciado en Derecho-UNAM, Maestro en Ciencias Penales-INACIPE y Doctor en Derecho-INADEJ. Articulista en revistas jurídicas y autor de una decena de libros publicados por la Editorial Porrúa. El último libro publicado es: "Jurisprudencia y Usucapión. Aplicable al juicio civil oral y escrito", 2022. Académico Universitario en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ) y en el Centro de Estudios de Posgrado (CEP). Abogado Postulante en materia Administrativa y Amparo.



Para el Lic. Adrián Marín

Después de los golpes ocasionados por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave), que causa la enfermedad COVID-19 (Coronavirus Disease from SARS-CoV2) y que impactó en el mundo normativo, tenemos una alteración en la tramitación y resolución de las controversias jurisdiccionales, obligando a los Juzgadores a sustentar muchas de sus decisiones en normas nuevas no generadas en los procesos legislativos sino en una normativa cuyo origen es el derecho administrativo y en órganos del mismo carácter, así como con criterios jurisprudenciales.

Una vez que culminó un juicio especial hipotecario, en donde se citó para subasta o remate, atendiendo a los preceptos legales establecidos en el código adjetivo de la materia en la Ciudad de México, la parte demandada impugnó esa determinación argumentando que la citación no se había hecho considerando los términos establecidos por el Consejo de la Judicatura de la CDMX, razón por la que estimó vulnerados sus derechos procesales; mientras que el actor sostuvo su apego a lo establecido en el párrafo tercero del numeral 570 del Código Procesal Civil vigente en esta ciudad, que indica el término de 5 días para la publicación del edicto respectivo. La cuestión parecerá sencilla: 1) ¿Deben aplicarse las normas procesales generadas en el proceso legislativo? o 2) ¿Deben aplicarse las normas emitidas por el Consejo de la Judicatura de la CDMX, ante las circunstancias atípicas presentadas por el virus SARS-CoV-2, en materia

procesal? Por lo que tendremos que preguntarnos: ¿Resulta legal atender a los términos y plazos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal (aplicable a la Ciudad de México) o deben aplicarse los lineamientos administrativos expedidos por el Consejo de la Judicatura de la CDMX?

La diferencia radica en que las normas administrativas conceden, en general, términos y plazos más amplios que los consignados en el código adjetivo civil, lo que desde la óptica procesal y temporal significan ventaja para una de las partes procesales, con el consecuente perjuicio para la otra, ya que las formas de realización de los cómputos difieren en cuanto al tiempo concedido. Desde nuestro punto de vista resulta pertinente analizar la problemática partiendo de las características de las normas involucradas, de su origen, de las atribuciones del citado CJCDMX, así como de la respuesta de algunos Órganos Jurisdiccionales que han emitido tesis aisladas para resolver la problemática presentada.

LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, LAS NORMAS JURÍDICAS Y LAS TESIS AISLADAS

Las normas administrativas "(...) regulan la función administrativa del Estado. Conservan su naturaleza administrativa aunque se encuentren en cuerpos legales de distinta índole como son leyes civiles,

mercantiles, laborales, penales, etc., si se ocupan de regular esa función.”¹

Para Nava Negrete, al referirse a la jerarquía jurídica de las normas administrativas expresa: “Dentro del sistema jurídico nacional las normas administrativas guardan la jerarquía que prevé el artículo 133 de la constitución, según que pertenezcan a ésta, a leyes del Congreso de la Unión o a Tratados Internacionales”.

De manera complementaria –siguiendo a Nava Negrete– debe considerarse que en el orden descendente están “(...) las circulares, que contienen normas generales, de uso generalizado en la Administración Pública, federal y estatal, el CFF de 1967 (DO del 19 de enero de 1967) restringió el alcance de las circulares expedidas por los funcionarios fiscales federales”.

Lo anterior implica que las normas administrativas pueden aplicarse en distintas materias, teniendo un objetivo principal que, en este caso regulan una función administrativa del Estado, la que se desarrolla al momento de resolver controversias jurisdiccionales, entendiendo al Estado como un todo que implica no una división de poderes sino una conjunción de funciones; mientras que las normas jurídicas procesales, en general, sin importar la materia específicamente, tienen un origen legislativo, pues derivan del proceso de creación de normas que se llevan a cabo en el Congreso de la Unión o en los Congresos locales, y que también poseen un objetivo específico, al establecer las reglas que servirán para afrontar los procesos jurisdiccionales en cuanto a los aspectos formales, de modo que las normas jurídicas son “reglas bilaterales que otorgan al mismo tiempo facultades y deberes, es decir, derechos y obligaciones.”²

Las normas jurídicas. Seguir la ruta fijada para la producción de normas implica participar en las etapas del proceso legislativo, que en palabras de Muñoz Rocha: “Según el proceso legislativo regulado en los artículos 71 y 72 constitucionales, las etapas de dicho proceso son: La iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciativa de vigencia”.³ Las tesis aisladas. En este contexto debemos atender a los criterios jurisprudenciales que, como resultado de los conflictos generados en un ambiente “COVID” o “POS-COVID”, han modificado la forma de

resolución de asuntos jurisdiccionales, lo que implica una alteración de las normas adjetivas y el surgimiento de normas administrativas, aplicables a conflictos judiciales, cuestión que puede verse desde dos ópticas: 1) ser acordes con el derecho o contrarias al derecho establecido, o bien, 2) podrían catalogarse como justas o injustas. Un ejemplo de estos criterios es el publicado bajo el rubro: NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SÓLO PUEDEN SURTIR EFECTOS LOS DÍAS HÁBILES EN LOS QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LABORE A PUERTA ABIERTA, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19).⁴

El texto señala el funcionamiento de los Tribunales que debido a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 05-19/2020, mediante el cual determinó que la atención al público se llevaría a cabo todos los días hábiles, en forma alternada y sucesiva, de manera que un día la actividad sería a puerta abierta, con atención al público en general y, al siguiente, a puerta cerrada. De ahí la suspensión de términos procesales en los Órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, exclusivamente en los días en los que esos órganos jurisdiccionales laboren y desarrollen sus actividades a puerta cerrada; en el entendido de que en los días que se labore a puerta abierta, los términos procesales correrán de forma normal.

La autoridad federal para sustentar su postura refiere que jurídicamente las notificaciones en materia civil sólo pueden surtir efectos los días hábiles en los que el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Ciudad de México labore a puerta abierta, durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). De esta tesis que, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo es un criterio no obligatorio sino de índole orientador, es importante resaltar los hechos que le dieron origen, pues en ellos se establece lo que, desde nuestra perspectiva, es el marco en donde se desarrolla la litis que nos ocupa, es decir: las normas administrativas vs. las normas jurídicas en el marco de las tesis de jurisprudencia aisladas.

1 NAVA NEGRETE, Alfonso, *Voz: Normas administrativas, Diccionario Jurídico Mexicano*, IIJ-UNAM-Porrúa, México, 2001, p. 2210.

2 Unidad de Apoyo para el Aprendizaje, *¿Qué es una norma?*, en: <https://uapa.cuaieed.unam.mx/sites/default/files/minisite/static/b21dc82f-af46-4e6e-aa9e-7ec603806a45/1-Concepto-de-Norma/index.html>

3 MUÑOZ ROCHA, Carlos I., *Teoría del derecho*, Oxford, México, 2013, p. 273.

4 Registro digital: 2023461. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Undécima Época. Materias(s): Civil. Tesis: I.11o.C.149 C (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, página 4885. Tipo: Aislada.

Así, la norma jurídica se origina en la necesidad derivada de los fenómenos políticos o sociales producto de la convivencia humana, dando lugar al proceso legislativo y, con ello a la existencia de la nueva normativa que habrá de regular esa nueva realidad en beneficio de las personas. En forma complementaria, podemos señalar que, acorde con sus atribuciones, el citado Consejo de la Judicatura de la CDMX determinó lo siguiente: “Se autoriza la ampliación de suspensión de labores y por consecuencia, la suspensión de plazos procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México, hasta el treinta de junio de dos mil veinte; reanudándose labores el día uno de julio de dos mil veinte”.

Siguiendo el planteamiento formulado, debemos decir que la problemática siguió su curso y llegó al amparo, el cual fue concedido, resaltando, dentro de la argumentación sostenida por la autoridad amparista para otorgarlo, los plazos o términos y los días hábiles para llevar a cabo las actividades jurisdiccionales, así como el respeto a los derechos procesales de las partes, lo que nos conduce al enfrentamiento de normas que pudiendo ser complementarias, desde nuestro punto de vista, alteran el debido proceso, pues otorgan una mayor jerarquía a las que no la tienen y que en cuanto se aplican impactan en el resultado final, vulnerando los derechos procesales de los contendientes.

Es importante reiterar que las normas expedidas por el Consejo de la Judicatura de la CDMX inciden en los plazos, términos y días hábiles existentes para la práctica judicial, teniendo, en contraposición, los derechos que consagra el Código adjetivo de la materia y, adicionalmente, criterios que pretenden servir como sustento para resolver dicho enfrentamiento.

En suma, la interrogante sigue siendo ¿Deben aplicarse el contenido de las normas administrativas que derivan de las facultades del mencionado Consejo de la Judicatura, cuya naturaleza es administrativa, o bien, deben respetarse los términos y condiciones establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México?

LA REALIDAD PROCESAL

El párrafo tercero del artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, cuya aplicación ha dado lugar al debate y a la diferencia de posturas, refiere que: “Hecho lo anterior, y una vez que se encuentren debidamente identificados los bienes, se sacarán a pública subasta, anunciándose por medio de edicto que

se fijará por una sola ocasión, en los tableros de avisos del juzgado y en los de la Tesorería del Distrito Federal, **debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles”**.

Como puede advertirse, el párrafo tercero citado es preciso al indicar el plazo o término de 5 días para la publicación del edicto de subasta o remate correspondiente, el problema radica en la forma de computar esos 5 días, esto es: i) como lo indica el código adjetivo de la materia, o, ii) en términos de lo dispuesto por el Consejo de la Judicatura de la CDMX, lo que significa que solamente tomando en consideración los días en que los tribunales respectivos se encuentren laborando “a puerta abierta”.

La sentencia concesoria no acató tal dispositivo, invocando para ello las normas administrativas que expidió el Consejo de la Judicatura de la CDMX, sin considerar lo dispuesto en el código adjetivo de la materia, además que apoyó su determinación en las tesis aislada invocada que, no debe olvidarse, carece de la obligatoriedad necesaria para sustentar determinaciones judiciales y sólo en los casos en que la norma aplicable no sea adecuada para la resolución del asunto en cuestión, de donde podemos apreciar que se trata de un criterio orientador sin obligatoriedad alguna, conforme a lo dispuesto en la Legislación de Amparo.

Lo que en este asunto acontece es la indebida aplicación de las normas administrativas que vulneran las normas jurídicas. La determinación de un ente administrativo no puede estar “encima” de una norma creada por el órgano legislativo, de modo que al privilegiar la administrativa sobre la jurídica se está vulnerando el debido proceso legal que es una de las máximas obligaciones que se deben respetar en el Poder Judicial.

En estas condiciones, se presenta un Conflicto de Normas, cuya resolución debe ser atendiendo a los siguientes criterios: 1) Cronológico, según el cual *Lex Posteriori Derogat Priori*; 2) De especialidad, en base al cual *Lex Specialis derogat generalis*; 3) Jerárquico, por el cual *Lex Superior Derogat Inferior*; y, 4) Criterio de *Lex Favorabilis*.

CONCLUSIÓN

En uso de las facultades que posee y de su libertad e independencia judicial, el órgano resolutor debe resolver aplicando las reglas o criterios del conflicto de normas, de donde surgirá la determinación para aplicar las normas jurídicas específicas del proceso civil y no las de índole administrativa.

CONOCE NUESTRAS MAESTRÍAS

**MAESTRÍA EN SISTEMA ACUSATORIO
Y JUICIOS PENALES ORALES**

**MAESTRÍA EN DERECHO ADUANERO
Y DERECHO DE COMERCIO EXTERIOR**

**MAESTRÍA DERECHO CIVIL
Y FAMILIAR**

**MAESTRÍA EN DERECHO
CONSTITUCIONAL**

**MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL
Y ADMINISTRATIVO**

**MAESTRÍA DERECHO MARITIMO Y
DERECHO PORTUARIO**

NUEVA MAESTRÍA

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA E HISTORIA

NUEVA MAESTRÍA



Consulta nuestros planes de estudio
www.cuej.edu.mx

Síguenos en:



LA SERPIENTE Y EL ÁGUILA



Dr. Víctor Amaury Simental Franco

Investigador Nacional SNI 1, Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho por la UNAM, Maestro y Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo por el IPN, catedrático en diversas instituciones privadas y públicas.

Cuando se alude al escudo nacional de México por lo regular se dice “el águila”¹, recayendo en ella la esencia de la iconografía nacional, ¿esto reviste alguna importancia?

En política hay una máxima que dice que la forma es fondo: en la historia se afirma que conocer el pasado permite entender al presente; en sociología se sabe que la cultura popular es causa y destino social; en metafísica se dice que nada es casualidad, sino que todo es causalidad. Considero que razonar y tratar de explicar el porqué cuando se alude al elemento animal en nuestro escudo nacional, todo el peso recae en el águila y se anula a la serpiente.²

Aquí es más que oportuno indicar el papel que desempeñan el águila y la serpiente, aquella ha cazado a ésta y se dispone a devorarla, hay un vencedor y un vencido en esta lucha; esta contienda genera filias y fobias naturales, porque en tanto que las águilas no son (en estado natural) peligrosas para los humanos, las víboras de cascabel sí entra-

ñan riesgos graves para la gente que anda en su ecosistema salvaje, a lo anterior debe sumarse que en la teología dominante la serpiente es la encarnación del mal.

Vayamos por partes, la nación mexicana se ha constituido en torno a momentos icónicos fundacionales que se sitúan en escenarios de tragedia: desde que se haya “elegido” como cimiento de la nacionalidad mexicana a los aztecas, mexicas³ o tenochcas, lo cual debe ser motivo de un análisis más profundo, ya que, si bien, a la llegada de los españoles, los aztecas dominaban gran parte del centro del actual México, la realidad es que convivían con una gran variedad de pueblos que, muy posiblemente, han dejado una huella más significativa en la conformación del pueblo mexicano contemporáneo (debe tenerse presente que en los cerca de 3 años que duró el proceso de dominio-conquista en contra de los aztecas, la gran mayoría de su población pereció y es muy probable que en los años inmediatos posteriores hayan muerto los pocos sobrevivientes).

¹ Quizá el mejor ejemplo al respecto sean los “volados”, en los cuales cuando se echa la moneda al aire se pregunta ¿águila o sol?, ya que una de las caras de la moneda es el escudo nacional (el águila), la otra por lo regular responde al rostro de un héroe nacional; sin embargo, en las monedas de la primera mitad del siglo XX se incluía una imagen solar, de ahí la alusión al “sol”.

² Creo que queda implícita la aún más notable omisión hacia los elementos vegetales: nopal, tunas, enciso y laurel, y ni qué decir del agua y la peña (o chinampa) que siempre son omitidos.

³ Se pronuncia meshicas, no mejicas, ni mucho menos mexicas.

Pues bien, los mexicas después de un largo peregrinar se asientan en la cuenca de los lagos centrales de México y en un período breve logran liberarse de los yugos a los que estaban sometidos y después se erigen como la nación dominante, son el águila que cazó a la serpiente.

Después, en el proceso de conquista, los españoles vencen a los aztecas y se imponen, ya sea mediante alianzas y / o dominio militar sobre el resto de las naciones indígenas, a pesar de que, simplemente por número y también por ser extraños a estas tierras, estaban en desventaja; sin embargo, vencen y conquistan, y su dominio es total, al grado de prácticamente aniquilar las culturas locales e imponer la suya, bajo un dominio colonial de 300 años. Son los españoles y sus descendientes directos (y los mestizos también se lo creen) el águila (cristiana) que ha vencido a la serpiente (diabólica de los pueblos originarios).

Después de los 3 siglos de colonia española, surge un nuevo sentimiento nacionalista, protagonizado por los criollos (españoles nacidos en América) y los mestizos, diversas circunstancias permiten que luego de una década de lucha se alcance la independencia de México, los nuevos mexicanos enarbolan en torno a ellos al águila vencedora que se impone a la serpiente "española" (no podría ser de otra manera).

Y así cada derrota o victoria en los años posteriores se utiliza para reafirmar la identidad en torno a un elemento: el vencedor = el águila. Pero...

Es cierto que el águila vence, pero es gracias a la derrota de la serpiente, a la vida de ésta que aquella puede vivir,

el águila lo sigue siendo, gracias a la serpiente que ha dejado de ser: se funde la muerte de la una, en la vida de la otra. Lo cual no es, ni debe ser, dato menor.

Es cierto que en este relato, quien se impone es el águila, pero en la naturaleza puede ser que las cosas sean diferentes, debe recordarse que ambas son depredadoras, capaces de imponerse y que, las dos son cazadoras; la víbora de cascabel no es un roedor, es una peligrosa cazadora, que es capaz de matar a rivales mucho más grandes que ella.

En la medida en que se le dé la importancia que merece a la serpiente en nuestro inconsciente colectivo, sabiendo que somos herederos de dos animales totémicos, depredadores ambos y, que uno le dio su vida al otro para persistir, quizás reconozcamos nuestras dos grandes raíces nacionales y no sólo estemos pensando en el vencedor, sino en el vencido que, con su vida, su derrota, le dio la fuerza, su vitalidad, al triunfador.



CONOCE NUESTRAS LICENCIATURAS

**LICENCIATURA
EN DERECHO**

Cuatrimestral

**LICENCIATURA EN
VISTA ADUANAL Y
COMERCIO EXTERIOR**

Semestral

**Pregunta por nuestros
horarios disponibles**



Consulta nuestros planes de estudio
www.cuej.edu.mx

Síguenos en:





Manual para la elaboración de tesis
Dr. José Manuel Vargas Menchaca



Enseñanza del Derecho
Dr. Miguel Ángel Granados Atlaco



Control de la Constitucionalidad en el Derecho Comparado Europeo
Dra. Sara Esteban Cabrera



Valoración Aduanera
Dr. Balam Lammoglia Riquelme



Personas
Dr. Miguel Ángel Flores Palma



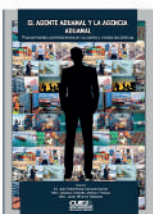
Historia del Derecho en México
Dra. María Elena Ayala Ensuastegui



Derecho Penal, Parte General
Dr. Miguel Ángel Granados Atlaco
Mtra. Ana Karen Viviana Orozco Calvo



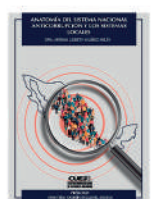
Argumentación Jurídica Práctica
Dr. Sergio Bazán Ortega



El Agente Aduanal y la Agencia Aduanal
Dr. Juan Rabindrana Cisneros García
Mtro. Gustavo Armando Jiménez Pereyra
Mtro. Javier Miranda Villalobos



Derechos Humanos
Coordinador:
Dr. Víctor Amaury Simental Franco.
Varios autores.



Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales
Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía



Derechos Humanos y Amparo
Dr. Juan Rabindrana Cisneros García
Mtro. José Antonio Gardá Ochoa



Teoría General del Estado
Dr. Miguel Ángel Granados Atlaco



Derecho Procesal Fiscal y Aduanero
Dr. Juan Rabindrana Cisneros García
Dr. Carlos Javier Verduzco Reina



T-MEC
Comentado:
Tomo 1, 2 y 3



Derecho Fiscal Internacional: Tomo 1 y 2
Dr. Hadar Moreno Valdez



Logística Funcional del Comercio Internacional
Mtro. Héctor Díaz Arzola



Manual Práctico de Clasificación Arancelaria
Dr. Carlos Muñoz Villavicencio



Compliance Aduanero Mexicano (Tomo 1 y 2)
Dr. Ricardo Méndez Castro



Nuevo Modelo Policial
Mtra. Sandra Regina Hernández Zeona



Derecho Fiscal Mexicano (Tomo 1 y 2)
Dr. Miguel García Vázquez

Contamos con más de **20 libros** para su análisis jurídico

ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL “DESCUBRIMIENTO” DE AMÉRICA¹

S. Sofía Cisneros Grosso

Estudiante de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM y de Derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.



Hace más de 500 años Cristóbal Colón llegó a tierras que forman parte del continente americano, desde aquel momento la tradición ha sostenido que Colón “descubrió América”. Si bien esta frase se ha perpetuado por diversos medios como la misma educación, libros, artículos, incluso cartas muy cercanas a aquel momento donde se narra lo grande que fue tal hallazgo, especialmente como un significativo paso de España hacia la modernidad y un triunfo del Renacimiento y la razón europea, ¿es correcto decir que “se descubrió América”? ¿Podemos decir legítimamente esto sin caer inmediatamente en un sinsentido? Pienso en un sinsentido porque al reflexionar un poco la palabra descubrir, sale la duda ¿Qué acaso América estaba oculta o escondida y de repente apareció? Pienso que la respuesta evidente es que no, porque los países o continentes están y existen y, no porque hayan sido desconocidos para la mente del hombre significa que cuando los ignoraban no existían.² Por lo cual, en este pequeño texto reafirmaré y apoyaré la tesis que sostiene Edmundo O’Gorman: América no fue descubierta sino que fue inventada.

Quizá esta afirmación podría parecer intrascendente el día de hoy, podrían objetar que no podemos poner en duda si Colón llegó a América o no, pero lo que buscamos aquí no es preguntar si realmente existió ese acontecimiento, cuestión que le competiría más a los historiadores. Sino en por qué un hecho que

simplemente fue: “en octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a una isla que él creyó perteneciente a Asia”, se interpretó como: “Cristóbal Colón descubrió América”. Entonces más que sobre el simple hecho estamos ante el problema de una interpretación de este hecho y, otra vez podrían volver a cuestionar sobre qué relevancia tendría discutir en la actualidad sobre cómo se interpretó este hecho si así se ha interpretado siempre.

Primero se dirá, que esta idea no la gestó el mismo Colón como veremos enseguida, sino que se fue construyendo desde fechas cercanas al arribo a América para explicar el mismo suceso. Asimismo se puede decir que los inicios de esta interpretación se deben a un rumor antiguo popular, una leyenda sobre un piloto anónimo³ que antes de Colón había advertido sobre que había tierras aún no conocidas, teoría que supuestamente se infundió en Colón al punto que emprendió su viaje para demostrar la existencia de aquellas tierras. Pero antes de referirnos a los rumores, narraremos brevemente los hechos.

El “Descubrimiento” de América no fue producto de la curiosidad espontánea de un hombre genovés ni un hallazgo fortuito, sino que al igual que muchos acontecimientos importantes, va precedido de muchos antecedentes. Más bien fue un resultado del Renacimiento florentino⁴, ya que aquí se configuró una nueva

1 Con motivo de la conmemoración que se hace cada 12 de octubre y en vista de la falta de cuestionamiento hacia esta fecha, es pertinente un estudio y análisis que nos permita conocer la historia diferente de aquella oficialista y patriótica que se instruye comúnmente en la educación mexicana, para acercarnos a los hechos de una manera adecuada y en los cuales la historia cobra mayor significancia.

2 Pensamiento que a pesar de ser usual, cae en el errado antropocentrismo del que pecan los hombres.

3 O’ GORMAN, Edmundo, *La invención de América. Investigación acerca de la estructura histórica del nuevo mundo y del sentido de su devenir*, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 18.

4 ROSSI, Annunziata, “El primer Renacimiento florentino: Ideas y presagios del descubrimiento de América” en *Ensayos sobre el Renacimiento italiano*, México, UNAM, s/a, pp. 47 y ss.

concepción del hombre y espacio⁵, al igual que con el Humanismo se recuperó el saber de los antiguos y hubo un gran retorno a la cultura grecolatina. Las teorías antiguas tuvieron gran influencia en los hombres del Renacimiento, pues desde antiguo se tuvo la sospecha de la esfericidad de la tierra⁶ y estaba la hipótesis de las antípodas que, de ser verdad, significaba la existencia de un cuarto continente (para aquel momento). Incluso con Platón ya se encuentran mitos relacionados con un continente desconocido y posteriormente con autores latinos, pero en todos los relatos sobre esta tierra o isla desconocida, se advertían los peligros (que obstaculizan y hacen casi imposible el viaje) que enfrentaría quien decidiera navegar hacia ellas, infundiéndole temor.

Aún más en la Edad Media se popularizan estos relatos, no obstante, ahora no sólo estaba el miedo a las bestias marinas y obstáculos que se encuentran en el océano, sino que la iglesia sumó un impedimento, declarando esta hipótesis como una herejía⁷, como algo prohibido. Lo cual puede constatarse en los versos de la *Divina Comedia* donde Dante Alighieri relata el viaje de Ulises, el cómo hay una enorme sed de conocimiento por ir a la tierra vedada (por develar lo desconocido), cruzar las columnas de Hércules que representaban el fin del mundo (*non plus ultra*), alcanzar la sapiencia divina, misión frenada y prohibida, que hace que Ulises caiga en el Infierno. En el mismo siglo de Dante, Marco Polo fija la creencia de que existen tierras desconocidas con bellas descripciones que hace de ellas. Hay ¡aún más! (*plus ultra*), y no cualquier tipo de tierras, sino islas bienaventuradas, madres de la utopía, adelantándose así el narrador italiano a su tiempo, dejando el fanatismo religioso y la doctrina para ver al “otro” con fascinación y curiosidad.

La imagen de un mundo desconocido se mantiene; sin embargo, es hasta el siglo XV donde una serie de factores posibilitan la exploración. Se da el humanismo florentino, caracterizado por el redescubrimiento y acercamiento a manuscritos antiguos, su traducción y lectura sin intermediarios (al contrario de la escolástica); entre el sinnúmero de manuscritos que llegan a Florencia por la caída de Bizancio está la Geografía de Ptolomeo, la cual se traduce al latín y rápidamente cobra importancia, renovando la cosmovisión del

siglo e impulsando fuertemente la colaboración entre artistas, matemáticos, filósofos, científicos, entre otros, para el estudio de la navegación, la geografía y la cartografía. Aquella articulación de la contemplación y la práctica, de la *episteme* y la *téchne*⁸, el auge del artista, la nueva concepción del espacio, aunado a una nueva configuración del sujeto, como libre y creador de su propio destino, desencadenaron búsquedas que finalmente desembocaron en el descubrimiento del *mundus novus*.

Cristóbal Colón, en gran medida inspirado por Marco Polo, busca encontrar las Indias descritas y recurre a los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que en ese momento representaban un enorme poder en Europa, y logra emprender su viaje, el cual sabemos que no tuvo el resultado esperado, Colón arribó a un continente desconocido y no a la Asia que se había propuesto, sobre si él estaba consciente de aquello o no, hay mucha discusión que ni su correspondencia puede determinar.

El primer texto donde se afirma que Colón “descubrió” América fue el *Sumario de la natural historia de las Indias* de Gonzalo Fernández de Oviedo, en el cual se presupone que Colón ya sabía de antemano a lo que iba en su viaje, porque las tierras que descubrió “las Indias” no eran algo desconocido teóricamente, específicamente menciona las “Hespérides”.⁹ Posteriormente Francisco López de Gómara en su *Historia general de las Indias* sólo lo pone como un segundo descubridor porque el primero fue el piloto anónimo que se ha mencionado. Sin embargo, quizá parezca más importante la opinión que el hijo de Colón, Fernando, expuso en *Vida del Almirante*; en aquella biografía de Colón, Fernando defiende que antes de su padre nadie sabía sobre la existencia de aquellas tierras desconocidas y, que él mediante sus vastos conocimientos, erudición y observaciones pudo deducir que existía un continente entre Europa y Asia por lo que emprendió un viaje para demostrar empíricamente su hipótesis.¹⁰

Hay más textos que hablan sobre “el descubrimiento de América” como el de Bartolomé de las Casas; sin embargo, quizá ya con las anteriores interpretaciones podemos ver que en todas persiste la idea del descubrimiento de América, las Indias o simplemente

5 Para ahondar en el tema de la subjetividad en el Renacimiento e inicios de la Modernidad, consúltese VILLORO, Luis, *La pérdida del centro*, México, Fondo de Cultura Económica.

6 Aunque el sistema aristotélico-ptolemaico (conocido como sistema geocéntrico) fue el que se siguió durante muchos siglos, desde la Antigüedad los pitagóricos y otros pensadores como Aristarco de Samos se decantaron y desarrollaron el sistema heliocéntrico.

7 Ya que la existencia de nuevas tierras pondría en tela de juicio muchos dogmas y creencias de la Iglesia.

8 El conocimiento (contemplativo) y la técnica (artesanal).

9 O' GORMAN, Edmundo, *op. cit.*, p. 24.

10 *Ibidem*, p. 25.

“tierras desconocidas” y, en el punto que difieren es sobre si se le puede considerar a Colón ser el descubridor. Un elemento fundamental aquí para argumentar si fue el descubridor o no es la conciencia, es decir, si Colón fue consciente de su hallazgo entonces sí merece aquel título, pero al mirar, de hecho, las cartas del propio Colón se lee que él fehacientemente afirmaba haber llegado al extremo oriental de Asia, lo cual era completamente sensato en su tiempo, según la física aristotélica que estaba bastante vigente: por la forma esférica de la Tierra era posible llegar a oriente navegando hacia el occidente.¹¹

Entonces, Colón estaba persuadido de haber llegado a Asia, incluso el hecho de que se le haya nombrado a esas tierras como las “Indias” ya indica bastante sobre dónde creía que se ubicaban y, aunado a sus experiencias que relata en sus cartas, donde amolda sus creencias sobre cómo estaban descritas esos lugares según textos antiguos (como los de Marco Polo) a lo que ve en realidad, se revela que él no sospechaba haber hallado un continente nuevo. Una prueba más: en los testimonios de los viajes que hizo no se menciona en ningún momento “América” ni tampoco él afirma que descubrió un continente. Por lo cual el hecho verdadero, que podemos inferir con lo analizado, es: Colón llegó a tierras que creyó que eran pertenecientes a Asia pero de hecho resultaron ser de un continente no conocido por los europeos hasta aquel momento, lo cual se supo después.

Por consiguiente, la pregunta vuelve a ser ¿Se puede afirmar legítimamente que Colón descubrió América? Y mi respuesta es negativa, primero: porque ni él estaba consciente de lo que había hecho; segundo: porque el hecho no coincide con su interpretación, siendo que lo que es objetivamente real es el hecho y; por último, porque aunque hubiese sido consciente de su “hallazgo”, no es lo mismo arribar a un lugar desconocido que descubrir, la idea del descubrimiento de América sólo nos remite a una idea sumamente eurocentrista, donde pareciera que los únicos seres humanos que conocen y hacen patente el conocimiento son los europeos, donde además pareciera que la historia de América sólo empezó a raíz de

su “descubrimiento”, lo cual es históricamente falso.

No obstante, es importante prestar atención que a partir de la aceptación de aquella interpretación se definió el destino de América. En palabras de O’Gorman: “(...) esa cuestión involucra, ni más ni menos, la manera en que se concibe el ser de América y el sentido que ha de concederse a su historia”.¹² Es decir, a partir de que América se descubre y se nombra (o mejor dicho renombra, porque ya los lugares tenían un nombre) se le otorga de ser, un modo específico de ser y, por ende, las cualidades de este ser, sus atributos, el cómo ha de ser.

Finalmente, a manera de reflexión, pareciera que los españoles con el simple hecho de nombrar a América sintieron que le dieron un ser sobre el cual tenían un poder y derecho para hacer lo que quisiesen sobre ella. Describieron que era un paraíso terrenal, escribieron cartas donde relataron el lugar y así inventaron América y, reafirmo, no lo puedo ver como otra cosa más que una invención porque antes América ya era ¿A la luz de qué ojos?, de ella misma y de sus habitantes, quienes ya estaban ahí, ya tenían costumbres y tradiciones, modos de vida establecidos y creencias propias. Y al decir que ésta se descubrió estamos negando su historia y admitiendo que sólo pudo existir a raíz de su descubrimiento, lo cual no es cierto.



¹¹ *Ibidem*, p. 80.

¹² *Ibidem*, p. 15.



**MAESTRÍA EN
DERECHO
MARÍTIMO
Y DERECHO PORTUARIO**

CUATRIMESTRAL RVOE 20220306



**MAESTRÍA EN
FILOSOFÍA E
HISTORIA**

CUATRIMESTRAL RVOE 20220304

TRASCIENDE

CON LOS NUEVOS POSGRADOS

ADUANAS MARÍTIMAS, SEGURIDAD NACIONAL Y TALASOPOLÍTICA, ENFOQUE ACTUAL



Mtro. Armando Caballero Vázquez

Es Contralmirante del Cuerpo General. Egresó de la Heroica Escuela Naval Militar como Guardiamarina y se tituló como Teniente De Corbeta e Ingeniero en Ciencias Navales. Tiene Especialidad en Mando Naval, Maestría en Administración Naval y Estado Mayor y Maestría en Seguridad Nacional, todos en el Centro De Estudios Superiores Navales. Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Derecho Aduanero en el Centro Universitario De Estudios Jurídicos. Desde el 1° de octubre de 2020 se desempeña como Titular de la Aduana Marítima de Progreso.

México es un país bioceánico, la extensión de sus litorales es de 11,122 kilómetros, de los cuales el 68% corresponde al Océano Pacífico y Golfo de California y el 32% restante al Golfo de México y Mar Caribe. A lo largo de los litorales nacionales existen 102 puertos, los cuales le permiten a México conectar con más de 145 países, entre ellos las grandes potencias comerciales, como Estados Unidos, la Unión Europea y China.

Durante el 2020, la Secretaría de Marina (SEMAR) recibió de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el control de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, lo que significó recibir las Capitanías de Puerto y las Administraciones Portuarias Integrales Federales.

En el presente año, las Administraciones Portuarias Integrales, bajo control de la SEMAR, cambiaron su denominación a la de Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) y se concluye con el nombre del puerto donde se ubican. Así tenemos, por ejemplo: Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz.

A partir del mes de octubre del 2020, las Aduanas Marítimas tienen como titulares a Almirantes y Capitanes de la Armada de México, ya sea en situación de retiro o en el servicio activo. En el artículo 38, fracción II del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas se establece que las Aduanas Marítimas serán coordinadas por la SEMAR.

Por lo anterior, hoy en día se coordinan las labores de las Capitanías de Puerto, ASIPONAS y Aduanas Marítimas para cumplir con la normatividad vigente, haciendo de los puertos nacionales espacios seguros, productivos y que contribuyen a preservar la Seguridad Nacional. Sin embargo y, pese a este gran esfuerzo coordinado de autoridades, el autor ha observado durante algo más de cuarenta años la ausencia de la llamada “Conciencia Marítima”.

Derivado de la ausencia de un imaginario colectivo que dé un papel preponderante al mar, la clase política no es la excepción y quien se encarga de gobernar y legislar carece del conocimiento y experiencia para establecer políticas públicas que alienten las actividades comerciales que tengan por escenario la mar eterna. De ahí que el término “TALASOPOLÍTICA” sea prácticamente desconocido.

SEGURIDAD NACIONAL

El término Seguridad Nacional lo encontramos por vez primera en México en el año de 1973, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación que daba competencia a la Dirección Federal de Seguridad para la recolección y el análisis de la información relacionada con la seguridad de la nación.

Una referencia posterior está en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, dentro del capítulo dedicado a las fuerzas armadas. La relación directa de las

fuerzas armadas con la Seguridad Nacional corresponde al “objetivo de reafirmar y consolidar la viabilidad de México como país independiente”. La defensa de la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación se convierten en un objetivo primordial de la Seguridad Nacional.

La Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3 menciona que la Seguridad Nacional son “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.”

El Glosario de Términos Unificados de Seguridad Nacional, elaborado y publicado en forma conjunta por el Colegio de la Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales, sostiene que la Seguridad Nacional es la “Condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, independencia, soberanía, estado de derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus objetivos nacionales.”

La finalidad de la Seguridad Nacional es proteger la integridad del Estado mexicano. Busca contribuir al logro de los Objetivos Nacionales plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Por otro lado, las Aspiraciones Nacionales constituyen los anhelos de la Nación. Las aspiraciones son el vértice principal de una nacionalidad. Las Aspiraciones Nacionales, mediante las acciones de gestión del gobierno se vuelven los Intereses Nacionales. Dentro de estos Intereses Nacionales se destacan los llamados Intereses Principales que son: Seguridad, Alimentación y Desarrollo. Los Intereses Nacionales gestionados por el poder político del Estado, tienen el potencial de convertirse en Objetivos Nacionales.

Los Objetivos Nacionales pueden ser:

- Permanentes (plasmados en la CPEUM), políticas de Estado.
- Coyunturales (se describen en el PND), plantean la solución de problemas inmediatos, durante periodos cortos.

Podríamos resumir que los Objetivos Nacionales son la síntesis de las Aspiraciones Nacionales, gestionadas por el Poder Político del Estado.

A la consecución de estos Objetivos se oponen diversos Antagonismos u Óbices, definidos como todo tipo de obstáculo y/o interferencia a la Seguridad Nacional, que puede ser patrocinado por otro Poder Nacional o por agentes no estatales, o bien puede ser de origen natural o antropogénico, que impide o limita la consecución de las Aspiraciones, Intereses y Objetivos Nacionales. Los Antagonismos se clasifican en Riesgos y Amenazas.

- **Riesgo:** es un antagonismo que implica una condición, interna o externa, generada por situaciones políticas, económicas, sociales o por agentes no estatales, así como por desastres de origen natural o antropogénicos cuya evolución pudiera poner en entredicho el desarrollo nacional.
- **Amenaza:** es un antagonismo **intencional** generado por el poder de otro Estado o por agentes no estatales, cuya característica es una **voluntad hostil y deliberada** que pone en peligro de **vulneración** particularmente **grave** a las Aspiraciones, Intereses y Objetivos Nacionales.

En México, la Seguridad Nacional no se ve amenazada por la acción de otros Estados sino por las nuevas amenazas:

- A. NARCOTRÁFICO.
- B. DELINCUENCIA ORGANIZADA.
- C. FENÓMENOS NATURALES.
- D. EPIDEMIAS.
- E. PANDEMIAS.

Actualmente a la Seguridad Nacional se le ha dado otra conceptualización más amplia. Se han considerado otros fenómenos que incluyen no sólo la supervivencia política sino también el bienestar general.

En México está cada vez más vigente el binomio: sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no habrá seguridad. Kofi Annan, quien fue Secretario General de las Naciones Unidas, dijo: “Hoy la Seguridad se entiende cada vez menos en términos militares, y mucho más como la ausencia del conflicto, es, de hecho, un fenómeno que abarca desarrollo económico, justicia social, protección del medio ambiente, la democratización, el desarme y los derechos humanos”.

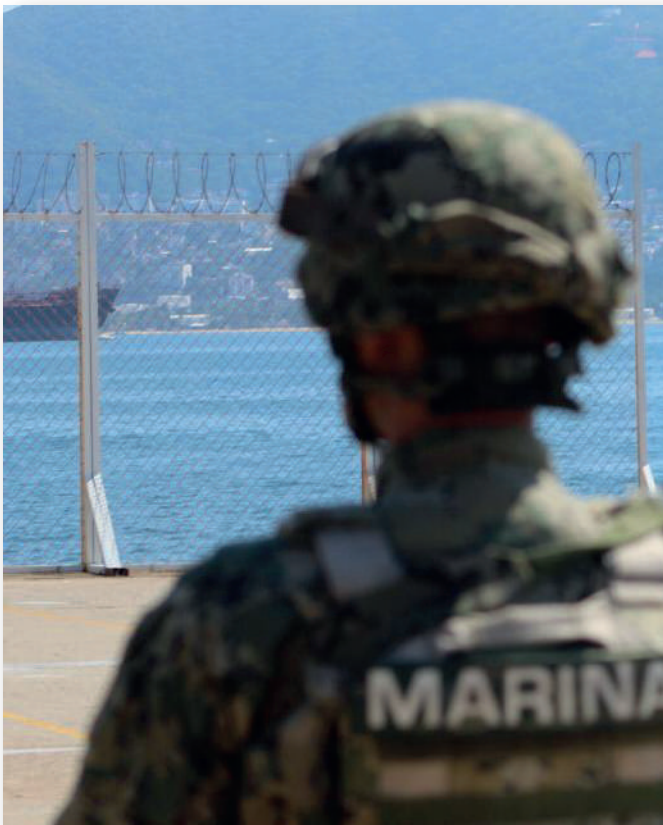
Ya se han descrito los principios fundamentales de la Seguridad Nacional, a continuación, se tratará de responder a la siguiente interrogante: ¿Cómo se enlaza esa materia con el Derecho Aduanero?

Si bien es cierto que el imperativo funcional de las Aduanas es la recaudación de impuestos al comercio exterior, una de sus funciones más importantes para el país es **coadyuvar a la Seguridad Nacional**, lo hace evitando que ingresen activos prohibidos y se exporten especies protegidas de flora y fauna silvestre.

En las Aduanas, principalmente en las Marítimas, se han asegurado numerarios, armas, municiones, precursores químicos para elaborar drogas sintéticas y enervantes, entre los que destaca la cocaína. Así, día tras día y mediante una labor callada pero eficiente, personal adscrito a las Aduanas coadyuva a preservar la Seguridad Nacional.

LA TALASOPOLÍTICA, ESA DESCONOCIDA

Thálassa en la mitología griega era la diosa del mar, hija de Éter y Hemera, y su personificación era el Mar Mediterráneo.



Se puede afirmar que la Talasopolítica es el estudio multidisciplinario de los espacios marítimos, contemplados dentro de la jurisdicción estatal y en beneficio de su sociedad. El mar, como vía de comunicación y espacio estratégico, se convierte así en el centro de la definición y defensa de los Intereses y Objetivos Nacionales del Estado, en los cinco campos del poder: político, económico, social, militar y científico y tecnológico.

IMPORTANCIA DEL SECTOR MARÍTIMO

El transporte marítimo se ha distinguido a lo largo de la historia por su carácter eminentemente internacional. Actualmente el 90% del comercio mundial se lleva a cabo por medios marítimos.

MÉXICO EN EL COMERCIO MARÍTIMO MUNDIAL

Con la coordinación de esfuerzos entre las Capitánías de Puerto, las ASIPONAS federales y las Aduanas Marítimas, todas ellas bajo el concierto de la SEMAR, se puede y debe aprovechar la gran importancia económica que representa el Comercio Exterior por los puertos de mar nacionales.

ESTUDIO GEOPOLÍTICO DEL MAR:

El mar es un nexo de unión, porque el intercambio comercial acerca a las naciones, como consecuencia del contacto económico, político y cultural. El mar como límite entre Estados es una excelente frontera política. Su seguridad está dada por las características de sus costas y su poder marítimo. Impone al posible adversario la necesidad de contar con una flota naval cuyo poderío sea superior al del otro.

Como ya se dijo, el mar como vía de comunicación y espacio estratégico se convierte en el centro de la definición y defensa de los intereses del Estado (político, económico y de seguridad).

México, a pesar de su privilegiada posición geoestratégica y rodeado por los dos más grandes océanos del mundo, vive de espaldas al mar. El presidente de México, Adolfo Ruiz Cortínez (1952-1958), ha sido el único, hasta el momento, que ha puesto en práctica un plan conocido como «La Marcha al Mar», con el fin de optimizar la explotación y el desarrollo de los recursos del mar. Nada ha ocurrido desde entonces.



En el ámbito internacional, después de los ataques terroristas que ocurrieron en septiembre de 2001, se incrementó la seguridad de las instalaciones portuarias. A partir del 17 de junio de 2017, la SEMAR asumió el liderazgo de la Autoridad Marítima Nacional. Lo anterior demanda del conocimiento y las coordinaciones necesarias, con las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal que cuentan con atribuciones en el ámbito marítimo, con el fin de tomar las decisiones adecuadas en los espacios marítimos nacionales. La materia que se encarga de ello es la Talasopolítica.

Si únicamente se observara el aspecto económico de desarrollar a la Marina Mercante como una acción de Talasopolítica Mexicana se obtendrían los siguientes beneficios:

- A.** Mayor participación en el comercio marítimo mundial, generando y ahorrando divisas (muchos buques que operan en puertos mexicanos lo hacen bajo un contrato de fletamento).
- B.** La generación de innumerables fuentes trabajo, por la necesidad de un número muy considerable de personal, tanto a bordo de los buques, como en los puertos.
- C.** Una mayor generación del Producto Interno Bruto Nacional.

- D.** Mejor posicionamiento de México a nivel internacional, por la presencia de buques mercantes nacionales en puertos extranjeros.

Por otro lado, en líneas arriba el autor mencionó que durante más de cuarenta años ha observado que nuestra población en general carece de “conciencia marítima”. Esto se ejemplifica mejor con la siguiente información:

Apenas en el presente año se presentó y aprobó en el Congreso Federal, una Iniciativa de Ley, con Proyecto de Decreto para modificar la Ley General de Educación, a fin de que se incluyera en todas las escuelas la materia que sirva para dar a conocer y fomentar en los educandos la Conciencia Marítima. Al fundamentar el dictamen, el diputado Jaime Martínez López (Almirante en situación de retiro), presidente de la Comisión de Marina, afirmó que “es un dictamen histórico porque nunca, en una Ley General de Educación, se había incluido el conocimiento específico de nuestros mares y recursos para el desarrollo marítimo”.

Con este hecho tan trascendental para México se inicia una verdadera toma de conciencia y se espera que, en un futuro no muy lejano, la Talasopolítica Mexicana sea un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país.

CONCLUSIONES

A pesar de ser un país bioceánico, México no ha dado la justa dimensión a la importancia de sus mares. Olvidando los momentos más amargos de su historia (basta recordar que las invasiones que ha sufrido nuestra nación han llegado por mar), no ha sabido definir y fortalecer una Política Integral de Desarrollo Marítimo. Todo inicia con la actual falta de conciencia marítima, que prevalece en la mayoría de la población, pero sobre todo en la clase política, encargada de legislar y gobernar.

Con una verdadera conciencia marítima, que sea la raíz y razón de la Talasopolítica, se podrán afrontar mejor los antagonismos a la Seguridad Nacional que se susciten en la mar, pero además se fomentará el desarrollo de los diecisiete estados costeros y los 102 puertos de mar. Estas acciones redundarán en un incremento en el comercio marítimo, como base principal del comercio exterior de México.

Una cantidad mayor de operaciones de comercio exterior demandará a las Aduanas Marítimas un gran incremento en sus capacidades operativas, tanto de personal, como de los equipos de revisión no intrusiva. Los titulares de estas Aduanas ya estamos coordinando acciones para solventar estas necesidades, con una verdadera visión de Estado.

México está llamado a convertirse en una potencia mundial en materia de comercio marítimo, sólo basta con volver la vista a la mar eterna: conocerla, respetarla, amarla y saber extraer de ella todo el cúmulo de riquezas que guarda para los mexicanos, desde hidrocarburos, minerales, pesca y actividades turísticas.

REFERENCIAS:

CARBAJAL CONTERAS, Máximo, *Derecho Aduanero*, 15ª edición, Porrúa, México, 2009.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Glosario De Términos Unificados de Seguridad Nacional, Ed. CODENAL- CESNAV, México, 2010.

Ley Federal del Mar

Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Ley Aduanera

Ley de Comercio Exterior

Ley de Seguridad Nacional

Reglamento de la Ley Aduanera

Reglamento de la Ley De Comercio Exterior

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México

VALDÉS CERDA, Ricardo, "La Talasopolítica En México", en *Revista del Centro de Estudios Superiores Navales*, volumen 39, número 3, julio-septiembre de 201

CONOCE NUESTROS DOCTORADOS

DOCTORADO EN DERECHO

DOCTORADO EN DERECHO ADUANERO
Y DERECHO DE COMERCIO EXTERIOR

DOCTORADO EN DERECHO FISCAL

Nuevo Doctorado



Consulta nuestros planes de estudio
www.cuej.edu.mx

Síguenos en:



LOS NFT'S NEGOCIO CON MÚLTIPLES DERECHOS VULNERADOS



Dr. Carlos Arturo Martínez Negrete

Es productor musical, periodista de formación, Maestro en Administración Pública y Doctor en Ciencias Sociales y Administrativas con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Castilla de la Mancha. Por más de 10 años ha sido activista en temas de "preservación del patrimonio cultural", columnista en medios como Quadratín Hidalgo, Noticias Transformación MX y Revista EJE, entre varios.

¿QUÉ SON LOS NFT'S (NON FUNGIBLE TOKENS)?

Los NFT's son la propiedad única de un archivo digital o los metadatos de éste, en meses pasados se vendió la imagen de un gato en casi 600 mil dólares, lo escuché por primera vez en la Galería de Yuri López Kullins en un brindis del artista gráfico, visual y plástico Xolotl Polo. He de confesar que de momento no comprendí el contexto de la venta de una obra o documento virtual o, incluso, la explotación de ésta como se ha dado en estos últimos tiempos.

Si bien, esta nueva modalidad de consumo sólo se pudo hacer (en un primer momento) mediante operaciones con monedas electrónicas (criptomonedas, bitcoins, etc.) estamos viendo el rompimiento de paradigmas en comercio de arte, creaciones musicales y contenidos en general. Páginas como Only-Fans encuentran rentabilidad en sectores poblacionales que requieren un contenido específico, en época de pandemia representaron oportunidades de ingreso económico para muchos creadores y de entretenimiento para las audiencias.

¿POR QUÉ LOS ARTISTAS ESTÁN EN ESTE NEGOCIO?

Los diez denominados "criptoartistas" que han generado más dinero han ganado 342.5 millones de dólares vendiendo NFT's, según datos de Cryptoart. Equivale a la venta de unas 33.300 obras de arte virtuales.

Mike Winkelmann, conocido como Beeple, a septiembre del 2021 había vendido 1946 obras, equivalente a un valor superior a los 141.9 millones de dólares, siendo quien más ha obtenido recursos por este arte conceptual digital.

MÚSICOS E INTÉRPRETES VENDEN NFT'S

Los músicos e intérpretes están vendiendo NFT's, por ejemplo, el cantante canadiense Grimes vendió un archivo de arte digital a principios de este año, Kings of Leon lanzó su último álbum como una NFT's, el baterista de The Libertines, Gary Powell, lanzó su propia colección de obras de arte NFT's. Este último caso es particular, pues identificó un mercado de compra-venta o de quiénes compraban para revender este tipo de obras.

Algunos artistas refieren que es una especie de "morbo" por ver qué es este tipo de contenidos, pero se están vendiendo y es una nueva forma de adquirir arte, o merchandising o música, por ejemplo.

Algunos de quienes están comprando NFT's son inversores que esperan que adquieran valores superiores con el paso del tiempo, o incluso en la ausencia terrenal de sus creadores, las creaciones de determinados artistas subirían de valor al convertirse en artistas de culto o del mercado de nostalgia.

SE VENDE EL PRIMER NFT DE MÚSICA EN MÉXICO

El pasado mes de junio se subastó a través de la casa Morton el que considero es el primer archivo vendido de un artista mexicano, y fue del maestro Armando Manzanero, el cual tenía un precio de salida de \$200,000.00 y terminó vendiéndose en \$12,400 dólares cercano a los \$250,000.00 pesos mexicanos.

Lo más interesante de esta transacción es que el comprador se beneficiaría del 20% de las regalías generadas por la explotación comercial de la obra, esto marca un gran precedente para el coleccionista de obras de arte, pues los NFTA, a diferencia de las obras plásticas generarán una rentabilidad, apreciación del activo y me refiero a los coleccionistas de obras, pues son en los nichos que se encuentran vendidos estos productos.

DATO DE ETIQUETA DEL NFT'S

ARMANDO MANZANERO

(Ticul, Yucatán, 1935 - Ciudad de México, 2020)

Como Yo Te Amé, Versión inédita interpretada en el concierto en Chichén Itzá

ID del token: 0xF5eE7A9ac27520830d248618Fd45c05D37-FcF940

Dirección de wallet: 0x9285208640157CE6BaEaFEcf5B268EC801e8e70e

Dirección del smart contract: 0xF5eE7A9ac27520830d248618Fd45c05D37FcF940

Detalles técnicos: MP4

Esta obra es única (Con contenido desbloqueable para el propietario).

Portada diseñada y animada por Dave Ordñajela.

Incluye un Infinite Object: marco de acrílico con una pantalla diseñada para reproducir el NFT de forma permanente.

El comprador de este NFT, tendrá derecho a un 20% de las regalías obtenidas por la comercialización de esta versión de la canción, después de su lanzamiento. Así como, acceso exclusivo al desarrollo del proyecto "Una Vida: Armando Manzanero". Para más información, revisar las condiciones de compra en nuestra página de internet www.mortonsubastas.com.¹

MARTÍN MOBARAK QUEMA LA OBRA "FANTASMONES SINIESTROS" DE FRIDA KAHLO

“ En pasados días el mundo del arte se conmocionó cuando fue anunciada que una obra de Frida Kahlo había sido quemada en una subasta tras ser comprada en 10 millones de dólares, esto por una increíble razón. Martín Morabak, un coleccionista privado acudió a la subasta de "Fantasmones siniestros" de Frida Kahlo cuya obra había sido valuada en millones de dólares, tras una intensa puja fue él quien se llevó la obra por nada más y nada menos de 10 millones de dólares.² ”

El coleccionista refirió que la intención de generar esa acción era para recaudar dinero que sería retribuido al INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) y al Museo Frida Kahlo que está en Coyacán, en la Ciudad de México.

LO QUE VIENE:

- Está nueva forma de adquisición de bienes artísticos y culturales representa capitalización para los creadores, una alternativa de financiamiento, una nueva línea de negocios enfocado en el mercado virtual, a diferencia de los casos anteriores, con el de Armando Manzanero encontramos que en esta transacción no fueron criptomonedas, se puso puja de salida en dólares convertida a pesos mexicanos.

¹ Información tomada de la página del artista: <https://www.camanzanero.com/nft>

² "Coleccionista compra obra de Frida Kahlo para quemarla" en <https://www.aztecajalisco.com/tendencia-y-viral/compran-obra-frida-kahlo-para-quemarla>

- La apertura a la distribución de contenidos digitales en exclusiva, la incorporación de nuevas disciplinas en las ventas posteriores de archivos digitales, así como la vinculación entre diversos artistas para realizar colaboraciones conjuntas.
- Mayor interés en el consumo de arte digital y reconocimiento a los creadores.

VULNERACIÓN DE DERECHOS.

- Violación a derechos culturales, económicos, políticos y sociales (Derechos Humanos).
- Al ser un archivo digital queda la duda sobre la adquisición de estos derechos si pierden vigencia al concluir el periódico legal que marcan las leyes mexicanas y al ser un producto digital los acuerdos internacionales, los tiempos sobre la posición de la obra, si pasan al "Dominio Público" por ejemplo.
- En el caso de artistas que han fallecido como Frida Kahlo en México existen violaciones a diversas leyes como la manifestó en comunicado la Secretaría de Cultura Federal³, lamentablemente en esa misma declaración de la dependencia se desvincula al reconocer que la acción de la destrucción de la obra se realizó en la ciudad de Miami Florida, es lo mismo que sucede con los diversos casos de la denominada "apropiación cultural", en donde se han generado exhortos, pues la mayoría de los casos son en el extranjero y eso no permite la acción jurídica con el marco actual y la tan renombrada Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural que incentivo la Senadora Susana Harp (2021) que lamentablemente no ha generado ningún fruto que

incida de manera directa en los pueblos originarios de México.

LA SALIDA INMEDIATA PARA LOS CREADORES

Lo he referido en múltiples foros y textos, es la creación inmediata de sociedades de Gestión Colectiva, ya que son marcos jurídicos reconocidos a nivel mundial y su operación sería la incorporación inmediata a la protección, de uso factible y rápido.



³ SECRETARÍA DE CULTURA, "Posicionamiento sobre destrucción de obra de la pintora Frida Kahlo", Comunicado, 26 de septiembre de 2022, en <https://www.gob.mx/cultura/prensa/posicionamiento-sobre-destruccion-de-obra-de-la-pintora-frida-kahlo>



DIPLOMADOS 100% EN LÍNEA



**Diplomado: Juicio Contencioso y
Recurso de Revocación**



**Diplomado:
IVA: Impuesto al Valor Agregado**



**Diplomado:
Derechos Humanos y Amparo en
Materia Administrativa**



**Diplomado:
ISR: Personas Físicas**



**Diplomado:
Derecho Aduanero**

SOLICITA FECHAS DE INICIO
cursos@cuej.edu.mx

 **WHATSAPP**
55 10815944

PROCEDIMIENTO PARA DEJAR SIN EFECTOS LA RESTRICCIÓN DEL USO DE LOS CERTIFICADOS DE SELLO DIGITAL (CSD)

Dr. Miguel García Vázquez

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho (UNAM). Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo y Doctor en Derecho, ambos por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Diplomado en "Impuestos sistematizados" (ITAM), diversos cursos y talleres de actualización ISR, IVA, IEPS y CFF (SHCP y SAT), actualmente labora en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.



En años anteriores al 2022, a que se adicionara el artículo 17-H Bis, del Código Fiscal de la Federación el 12 de noviembre de 2021, la autoridad fiscal en fragante violación a la seguridad jurídica de los contribuyentes y, sin mediar requerimiento o notificación alguna, procedía a cancelar los Certificados de Sello Digital (CSD), con los cuales se acredita la autoría de los comprobantes fiscales digitales por Internet que expiden las personas físicas y morales, con la irremediable consecuencia de que dichos certificados al estar cancelados cesaban sus efectos y ya no podrían utilizarse para la expedición dichos comprobantes fiscales digitales (CFDI).

Antes de entrar al procedimiento que se debe de realizar para dejar sin efectos la restricción del uso de los Certificados de Sello Digital (CSD), resulta de suma importancia considerar los supuestos que tomó en consideración la autoridad fiscal para proceder a restringir temporalmente el uso de dichos certificados que, conforme al artículo antes citado, se da cuando:

- Detecten que los contribuyentes, en un ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo, o de dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas.
- Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Régimen Simplificado de Confianza, la

restricción temporal se realizará cuando se detecte que omitió tres o más pagos mensuales en un año calendario, consecutivos o no, o bien, la declaración anual.

- Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca.
- En el ejercicio de sus facultades, detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante el procedimiento, desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente, se ignore su domicilio, o bien, dentro de dicho ejercicio de facultades se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.
- Detecte que el contribuyente actualizó la comisión de una o más de las conductas establecidas en el artículo 85, fracción I, del Código en comento, lo anterior, sólo será aplicable una vez que las autoridades fiscales le hayan notificado al contribuyente previamente la multa por reincidencia correspondiente.

Se entenderá que las autoridades fiscales actúan en el ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en que realizan la primera gestión para la notificación del documento que ordene su práctica.

- Detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que no hayan ejercido el derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido en dicho párrafo, o habiéndolo ejercido, no hayan acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios amparados en los comprobantes expedidos por el contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de dicho artículo, ni corregido su situación fiscal.
- Derivado de la verificación prevista en el artículo 27 del Código multicitado, detecten que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del diverso numeral 10.
- Detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades gravados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos, de retenciones o del ejercicio, o bien, las informativas, no concuerden con los ingresos o valor de actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, sus complementos de pago o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.
- Detecten que, por causas imputables a los contribuyentes, los medios de contacto establecidos por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, registrados para el uso del buzón tributario, no son correctos o auténticos.
- Detecten la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 del citado Código Fiscal de la Federación, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado de sello digital.
- Detecten que la persona moral tiene un socio o accionista que cuenta con el control efectivo de la misma, y cuyo certificado se ha dejado sin efectos por ubicarse en alguno de los supuestos del artículo 17-H, primer párrafo, fracciones X, XI o XII del ordenamiento en comento, o bien, en los supuestos del artículo 69, decimosegundo párra-

fo, fracciones I a V del Código Fiscal de la Federación, y no haya corregido su situación fiscal, o bien, que dicho socio o accionista tenga el control efectivo de otra persona moral, que se encuentre en los supuestos de los artículos y fracciones antes referidos y ésta no haya corregido su situación fiscal.

Derivado de lo anterior, los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital, podrán presentar, en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles, la solicitud para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de que, al día siguiente a la presentación de dicha solicitud se restablezca el uso de su certificado.

La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de diez días, contado a partir del día siguiente a aquél en que se reciba la solicitud correspondiente; hasta en tanto se emita la resolución correspondiente, la autoridad fiscal permitirá el uso del certificado de sello digital, esta resolución se dará a conocer al contribuyente a través del buzón tributario.

Aunado a lo anterior, la autoridad fiscal podrá requerir al contribuyente mediante oficio que se notificará por medio del buzón tributario, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el contribuyente haya presentado su solicitud de aclaración, los datos, información o documentación adicional que considere necesarios, otorgándole un plazo máximo de cinco días para su presentación, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento.

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo a que se refiere el párrafo anterior, para aportar los datos, información o documentación requerida, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo, dicha prórroga se entenderá otorgada sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo.

Transcurrido el plazo para aportar los datos, información o documentación requeridos y, en su caso, el de la prórroga, sin que el contribuyente conteste el requerimiento, se tendrá por no presentada su solicitud de aclaración, por lo que se restringirá nuevamen-

te el uso del certificado de sello digital y continuará corriendo el plazo de cuarenta días otorgado.

El plazo de diez días para resolver la solicitud de aclaración comenzará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que concluya el plazo para aportar los datos, información o documentación requeridos o, en su caso, el de la prórroga.

Si del análisis de los datos, información o documentación presentada por el contribuyente a través de su solicitud de aclaración o en atención al requerimiento, resulta necesario que la autoridad fiscal realice alguna diligencia o desahogue algún procedimiento para estar en aptitud de resolver la solicitud de aclaración respectiva, la autoridad fiscal deberá informar tal circunstancia al contribuyente, mediante oficio que se notificará por medio del buzón tributario, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que éste haya presentado la solicitud de aclaración o haya atendido el requerimiento, en cuyo caso la diligencia o el procedimiento de que se trate deberá efectuarse en un plazo no mayor a cinco días, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del oficio correspondiente. El plazo de diez días para resolver la solicitud de aclaración comenzará a computarse a partir de la fecha en que la diligencia o procedimiento se haya desahogado.

Cuando derivado de la valoración realizada por la autoridad fiscal respecto de la solicitud de aclaración del contribuyente, se determine que éste no subsanó las irregularidades detectadas, o bien, no desvirtuó las causas que motivaron la restricción provisional del certificado de sello digital, la autoridad emitirá resolución para dejar sin efectos el certificado de sello digital.

Asimismo, cuando se venza el plazo de cuarenta días hábiles a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, sin que el contribuyente haya presentado la solicitud de aclaración a través del procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de Administración Tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida, las autoridades fiscales procederán a dejar sin efectos los certificados de sello digital.

Es importante señalar que si el contribuyente presenta su solicitud de aclaración sin aportar argumentos ni pruebas para subsanar la irregularidad detectada o desvirtuar la causa que motivó la restricción temporal

del certificado de sello digital, dicha solicitud se tendrá por no presentada y no se restablecerá el uso de dichos certificados.

Cuando derivado del análisis de los argumentos y valoración de las pruebas aportadas por el contribuyente a través de la solicitud de aclaración y, en su caso, de la atención al requerimiento, si la autoridad determina que subsanó la irregularidad detectada o desvirtuó la causa que motivó la restricción temporal del certificado de sello digital, el contribuyente podrá continuar con el uso del mismo; en caso contrario, se dejará sin efectos. En ambos supuestos, la autoridad deberá emitir la resolución respectiva, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se presente la solicitud de aclaración, a aquél en que concluya el plazo para aportar los datos, información o documentación requeridos o el de la prórroga, o a aquél en que la autoridad haya desahogado la diligencia o procedimiento de que se trate.

Los contribuyentes a quienes se haya restringido temporalmente el uso de su certificado de sello digital (CSD) para la expedición de comprobante fiscal digital (CFDI) no podrán solicitar un nuevo certificado, hasta que subsanen la irregularidad detectada o desvirtúen la causa que motivó dicha restricción temporal.



Revise el Código QR para tener acceso al formato



FACILIDADES AL COMERCIO EXTERIOR. LA TASA GLOBAL DEL 19%, SU NATURALEZA JURÍDICA

Mtro. Arnulfo Domingo Tovar Juárez

Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila; cuenta con Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, así como el Doctorado en Derecho Aduanero por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Con más de 20 años de servicio en la Administración Pública tanto para el Servicio de Administración Tributaria como para la Agencia Nacional de Aduanas de México. En la docencia ha impartido diversas materias de Derecho Fiscal, Derecho Administrativo, entre otras. Actualmente es consultor en materia de Comercio Exterior y Aduanas para MRK Consultores.

En principio, tengo que reconocer que hasta que fue modificada la tasa global para importación de mercancías como facilidad a pasajeros internacionales, así como a compañías de mensajería, en junio de 2020, en donde se modificó de un 16% a un 19%, pude percatarme de que no se trataba del pago del IVA, sino de una tarifa o arancel especial. De hecho casi podría apostar que la mayoría de nosotros pensábamos que se trataba de un pago de IVA, pero al pasar a un 19% resulta que no teníamos una tasa de 19% en la Ley, sino sólo la del 16%, la tasa de 0% y la exenta.

Por lo anterior, tuvimos que redirigir nuestro análisis hasta los principios constitucionales de las contribuciones, el de legalidad, de equidad y proporcionalidad. En el presente caso me quiero referir al de legalidad en cuanto a la naturaleza jurídica de la tasa global del 19% que se aplica sobre el excedente de franquicia a pasajeros internacionales.

Como ya lo mencioné, debo reconocer que, durante algún tiempo y, quizá por el hecho de tener una tasa del 16% y anteriormente del 8%, indebidamente consideré que lo que estábamos pagando era el Impuesto al Valor Agregado y voy a explicar brevemente mi razonamiento, que consistió en considerar

que en el área de pasajeros las actividades primordiales son de turismo y de negocios y, que lo único que se hacía era de manera simplificada compensar el impuesto de las mercancías que compraron en el extranjero (como de consumo que es la materia del IVA, gravar el consumo) y de alguna manera compensar el mercado interno por el impuesto que no estaría pagando en México por esas mercancías. Aunque si bien, existen varios mecanismos para solicitar la devolución de ese impuesto que no debió pagar en el extranjero, tema también interesante que será objeto de otro estudio.

Con la entrada en vigor del T-MEC, se publicaron las Reglas Generales de Comercio Exterior el 30 de junio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, con un cambio interesante para nuestro estudio que fue el incremento de la tasa global para la importación de mercancías por pasajeros del 16% al 19%, lo cual es parte de un esquema o procedimiento simplificado para el pago de mercancía excedente de franquicia que ingresa a territorio nacional, sin la necesidad de hacer uso de los servicios de un agente aduanal.

No cabe duda que en las contribuciones de comercio exterior encontraremos otros elementos distintos a los de los impuestos internos, pues si hemos referido,

como ya lo hicimos en clase, que el hecho imponible resulta en la entrada o salida de mercancías a territorio nacional, habremos de advertir diversas particularidades como el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias (RRNA), en su caso los distintos regímenes aduaneros a los que se destinan las mercancías, o bien, como en el presente caso, conceptos particulares de nuestro estudio como lo son las mercancías exentas del pago de contribuciones o el de franquicia.

La tarea del presente ensayo será advertir cuál es la naturaleza jurídica de la tasa global para la importación de mercancías por pasajeros del 19%, como hecho impositivo, para lo cual habremos de plantearnos las siguientes preguntas:

¿En qué momento se causa?

¿Cuál es su fundamento?

¿Cuál es su naturaleza jurídica?

¿Se trata de una contribución?

¿Si no lo es, en dónde encuentra su sustento legal?

Como ya lo comenté, a efecto de dilucidar cuál es la naturaleza de la tasa global para la importación de mercancías por pasajeros en un 19%, habremos de analizar algunos conceptos previos.

Comencemos por señalar que el artículo 28 constitucional dispone que en nuestro país quedan prohibidas además de los monopolios, entre otras, las exenciones de impuestos; si bien podemos referir tal vez que existen algunos monopolios principalmente en temas de telecomunicaciones y/o áreas estratégicas, lo cual no es objeto del presente análisis, también existen exenciones de impuestos, ya que el propio artículo dispone que sí pueden existir dichas exenciones en los términos y condiciones que fijan las leyes.

El *Diccionario* de la Real Academia Española señala que la exención es una ventaja fiscal de la que por ley se beneficia un contribuyente y es exonerado del pago total o parcial de un tributo.

Es así como, en cuanto a este respecto el artículo 61 de la Ley Aduanera establece exenciones a impuestos de comercio exterior en diferentes supuestos, de los cuales nos referiremos al establecido en su

fracción VI: “(...) por lo tanto, no se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada o salida al territorio nacional de las mercancías que corresponden a los equipajes de pasajeros en viajes internacionales (...)”.

A su vez, el artículo 25 fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado menciona de forma general que no se pagará este impuesto en las importaciones por los equipajes y menajes de casa a que se refiere la legislación aduanera.

Por otra parte, no debemos olvidar que el artículo 51 de la ley aduanera establece cuáles son los impuestos que se causan al comercio exterior y son sólo dos: el general de importación y el general de exportación, ambos conforme a la tarifa de la ley respectiva, siendo esta precisamente la LIGIE.

A su vez el artículo 52 refiera a los obligados al pago de estos impuesto recayendo dicha responsabilidad en las personas en sus distintas calidades o supuestos, que introduzcan o extraigan mercancías al o del territorio nacional, esto además de cumplir con las RRNA.

De las anteriores disposiciones queda claro lo siguiente: 1) El hecho imponible es la importación de mercancías consistentes en equipaje de pasajeros, 2) Que tanto para el IVA como IGI, dichas mercancías se encuentran exentas y no pagan impuestos.

Pero hasta aquí no hemos llegado al objeto de nuestro análisis, que es el pago de la tasa global del 19% que el pasajero debe realizar por el excedente de su mercancía que, en principio, se supone está exenta.

Por lo que, a efecto de dar mayor claridad, debemos analizar otra figura que encontramos en las disposiciones del derecho aduanero, que es el concepto de franquicia, en donde en principio mencionaremos que el *Diccionario* de la Real Academia Española lo define como aquella exención que se concede a alguien para no pagar derechos por las mercaderías que introducen o extraen, o por el aprovechamiento de algún servicio público.

Pues bien, de entrada, la definición sólo habla de derechos o aprovechamientos. De igual forma Guillermo Cabanellas también habla de exención en el pago de derechos aduaneros. Por su parte, Máximo Carvajal señala que la franquicia es el paso libre que se concede a una persona para no pagar las contribucio-

nes, ni cumplir con las regulaciones de carácter económico establecidas para las mercancías.

En el capítulo 3.2 de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) en vigor para 2020, se establecieron las disposiciones relativas a importación de mercancías por pasajeros. En la regla 3.2.3 para los efectos de los artículos 61, fracción VI de la Ley Aduanera, 98 y 194 de su reglamento, dispone cuáles son la mercancías nuevas o usadas que integran el equipaje, las cuales son, entre otras, las siguientes:

- Bienes de uso personal (ropa, calzado, productos de aseo y belleza acordes a la duración del viaje).
- Dos cámaras fotográficas o de videograbación, tres celulares, un GPS, una agenda electrónica, una laptop, un proyector.
- Dos equipos deportivos personales, cuatro cañas de pescar, tres deslizadores, trofeos o reconocimientos.
- Libros, revistas y documentos impresos.
- Diez DVD, 5 CD, tres paquetes de software, una consola de videojuegos, 5 videojuegos, medicamentos de uso personal (con receta en caso de psicotrópicos).
- 10 cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco, 3 litros de bebidas alcohólicas, 6 litros de vino (Pasajeros mayores de 18 años).

Añade más adelante la propia regla que el equipaje deberá ser portado por los pasajeros y, además, podrán introducir las mercancías distintas de su equipaje como franquicia, es decir, además del equipaje que se menciona está exento, todavía se exenta de pago conforme a lo siguiente: cuando el pasajero ingrese al país por vía terrestre, mercancías con valor hasta un monto de 300 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera y, por vía marítima o aérea hasta 500 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera.

Otra disposición en la citada regla es que las franquicias de los integrantes de una misma familia podrán acumularse, así también que en temporada vacacional, conforme al “programa paisano”, la franquicia terrestre se incrementa de 300 a 500 dólares. De lo anterior entonces, concluimos que además de la exención que la ley dispone respecto de mercancías pertenecientes al equipaje del pasajero, se exenta también del pago de mercancías distintas a su equipaje hasta por el valor de 300 a 500 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera.

En cuanto a las importaciones y exportaciones de mercancías efectuadas por pasajeros, el artículo 50 de la Ley Aduanera dispone que están obligados a declarar si traen consigo mercancías distintas de su equipaje, ya señalamos que el equipaje está exento. Ahora bien, otro aspecto importante es definir lo que se considera como equipaje que ya mencionamos en la regla 3.2.3. de la RGCE para 2020 y, por otra parte, cuál es el procedimiento a seguir para el pago de contribuciones, que como ya también mencionamos, grosso modo se trata de un procedimiento simplificado establecido en el artículo 88 de la misma ley de la materia.

El artículo 88 de la Ley Aduanera dispone que los pasajeros podrán optar por determinar y pagar las contribuciones por la importación o exportación de mercancías distintas de su equipaje, mediante el procedimiento simplificado, caso en el que aplicarán el factor que publique la Secretaría, sobre el valor en aduana de las mercancías o sobre el valor comercial, según corresponda y, añade que el factor se calculará considerando la tasa prevista en el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; la correspondiente a los derechos de trámite aduanero y la mayor de las cuotas de las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación o de exportación, según se trate, sobre la base gravable de la contribución mencionada.

El factor que publica la Secretaría lo encontramos en la regla 3.2.2. de las RGCE para 2020, misma que dispone que para los efectos de los artículos 50 y 88 de la Ley Aduanera ya aludidos, los pasajeros en viajes internacionales podrán efectuar la importación de mercancías distintas a las de su equipaje (excluyendo su franquicia), sin necesidad de un agente aduanal, pagando una tasa global del 19%, cumpliendo las siguientes condiciones: que el valor de las mercancías no exceda de 3,000 dólares o su equivalente en moneda nacional, o de 4,000 dólares o su

equivalente en moneda nacional tratándose de equipo de cómputo; que se cuente con documentación comprobatoria que exprese el valor comercial de las mercancías; que no se trate de mercancías sujetas a RRNA (Regulaciones y restricciones no arancelarias); que no se trate de mercancías de difícil identificación para determinar su clasificación arancelaria (polvos, líquidos, gases, químicos).

Así mismo establece la propia regla que si se pretende importar bajo este procedimiento bebidas alcohólicas y/o vino, la tasa será de 114% y por un máximo de 6 litros; cajetillas de cigarros 637% y hasta un límite de 40; puros 383% hasta un límite de 50. Fuera de estos supuestos, la importación deberá efectuarse por conducto de un agente aduanal que tendrá la responsabilidad de realizar la clasificación arancelaria para el correcto pago de las contribuciones de comercio exterior y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias.

Finalmente, otros aspectos importantes a considerar en la propia regla respecto del pago realizado al amparo de este procedimiento simplificado a tasa global del 19% son los siguientes:

- El pago se considerará definitivo.
- No podrá deducirse ni acreditarse para efectos fiscales.
- No dará lugar a devoluciones ni pago de lo indebido.
- No exime del cumplimiento de disposiciones y regulaciones de comercio exterior, ni de infracciones y multas por su incumplimiento.

TENEMOS COMO CONCLUSIÓN:

- La tasa global del 19% se aplica sólo a pasajeros mediante un procedimiento simplificado, un procedimiento “especial” si así pudiéramos llamarlo.
- Se realiza por las mercancías que traiga consigo distintas de su equipaje y que excedan a la franquicia (o su acumulación) según proceda.

- No se cobra el impuesto general de importación, ni el derecho de trámite aduanero, ni el Impuesto al valor agregado de manera específica y por separado, sino que de todas estas contribuciones se obtiene un factor que se aplica como tasa “global”, por lo menos esto es lo que dispone la regla 3.2.2.
- No puede deducirse, ni acreditarse, ni solicitar devolución (cualidad atribuible a las contribuciones), tampoco procede pago de lo indebido, y se considera como pago definitivo.
- A pesar de que se trata de un procedimiento simplificado que atienden y realizan las autoridades aduaneras, el pago a razón del 19% no se considera un servicio por funciones que realiza el Estado en su carácter de ente público, además de que no se encuentra en la Ley Federal de Derechos.
- Tampoco es un aprovechamiento distinto de las contribuciones, pues dicho pago si goza de las características de una contribución.
- Por otra parte, en la ley del IVA, no se establece la tarifa global en ninguno de sus artículos, tenemos tasas del 0%, 16%, exenta pero no del 19%.
- Me parece que en materia de contribuciones encontramos casos especiales, como en el ISR, en el que tenemos distintos regímenes para el pago del impuesto, por ejemplo en el caso de incorporación fiscal, antes REPECOS y ahora RESICO, la tasa de cumplimiento es mínima, por citar algunas particularidades del caso, por lo que me parece que en el caso del IGI, este procedimiento simplificado es algo parecido a lo que acabo de comentar para ISR, pero respecto del IGI.

Veamos si con las anteriores conclusiones podemos responder nuestras preguntas iniciales:

¿En qué momento se causa? En la importación de mercancías por pasajeros internacionales.

¿Cuál es su fundamento? La regla 3.2.3 de las RGCE en vigor para 2020 que se tomó para caso de

estudio, en correlación con los artículos 50 y 88 de la Ley Aduanera.

¿Cuál es su naturaleza jurídica? Debemos concluir que su naturaleza jurídica es la del Impuesto General de Importación (IGI), si bien en procedimiento normal y de acuerdo a las disposiciones aduaneras y de comercio exterior, el importador sujeto pasivo está obligado tanto al pago del IGI y del IVA, además del DTA y, en su caso IEPS e ISAN que proceda, en el presente procedimiento simplificado establecido en Ley y en las RGCE, es un procedimiento especial, en el que en el caso de pasajeros internacionales sólo se exige el pago del IGI y el cumplimiento de RRNA, no así el IVA o DTA; y para el caso de IEPS cigarros, puros, vino y bebidas alcohólicas se pagará también la tasa específica establecida en las reglas para este mismo procedimiento.

¿Se trata de una contribución? Efectivamente concluimos que dicho pago goza de la naturaleza de contribución que encontramos en el Impuesto General de Importación (IGI).

¿Si no lo es, en dónde encuentra su sustento legal? Sí es una contribución y se sustenta en las facultades de la Federación y del propio Ejecutivo Federal en los términos del artículo 131 de nuestra Carta Magna, que al efecto disponen lo siguiente: Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten.

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, para crear otras, así como restringir o prohibir las importaciones o exportaciones y el tránsito de productos.

Finalmente hay que recordar que es en las tarifas de los impuestos generales de importación y exportación, en donde encontramos referidos el cumplimiento de los demás impuestos sujetos a pago por la importación de mercancía, como el IVA, IEPS e ISAN, así como lo relativo al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y cuotas compensatorias, así lo refiere el artículo 51 de la Ley Aduanera.



BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA REFORMA POLÍTICA AL DISTRITO FEDERAL

Lic. Rogelio Castillo Rosales

Maestrando en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos en la Maestría en Derecho Constitucional, Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la tesis intitulada “ANÁLISIS CRÍTICO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL JUICIO DE AMPARO”. Se ha desempeñado como servidor público en la administración pública (IMSS, PGJCDMX, PROFECO), es abogado postulante con más de 10 años de experiencia; actualmente labora en el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación.



Derivado del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, dicha entidad federativa cuenta con una autonomía constitucional, al establecerse en la actual disposición del artículo 122 de la Constitución Federal que: “La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa”. Sin embargo, se estima que esta modificación al texto fundamental es falta de prestancia jurídica y de una indebida técnica legislativa, en la medida en que el Poder Revisor de la Constitución hizo a un lado la cuestión del verdadero carácter de un “Distrito Federal”, desnaturalizando con ello la real y verdadera sede de los Poderes de la Unión.

En efecto, el legislador federal omitió precisar en el referido artículo 44 constitucional lo relativo a la conformación del nuevo Estado de la República en el supuesto de que se mudaren de residencia los poderes federales al tiempo en que se trasladen de la Ciudad de México a otro lugar, en la inteligencia de cuál sería el destino o la naturaleza jurídico-política de

ese Estado en el que se asienten los Poderes de la Unión, sin que se delimitara la situación del “otro lugar” al que se trasladarán los poderes federales, esto es, si pierde su calidad de Estado, pese a que por cuanto hace a la Ciudad de México, el aludido 44 sí prevé la consecuencia para este ente de la Federación.

Ello es así –se considera– cuenta habida que al ser dicha reforma a la Constitución una mutación política a la Ciudad de México para cuestiones diversas, como el hecho de que tuviera su propia constitución (en la medida en que la anterior expresión del artículo 44 implícitamente no lo permitía),¹ el Poder Reformador se centró en «elevar a rango constitucional» a la Ciudad de México con el tratamiento de “entidad federativa”, aunque pareciera que con la expresión de los enunciados normativos presentes, como lo son los artículos 43, 122 y 124, se le estuviese equiparando con un Estado más de la Federación o, al menos bajo una postura ecléctica, pareciera que se le da un tratamiento entre lo que “era” (el Distrito Federal) y lo que “puede ser” (un Estado de la Unión), por lo que dejó de lado el supuesto en comento, pese a que la anterior redacción a la reforma del 2016 no era del todo diáfana en su expresión.

¹ El artículo 44 de la Constitución Federal hasta antes de la reforma de 2016 en comento, disponía: “La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General”.

Basta recalcar que el anterior artículo 122 de la Constitución Federal disponía que: “Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo (...)” y que: “La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones (...)”. Preceptos constitucionales en los cuales claramente se establecía la naturaleza jurídico-política del Distrito Federal.

No obstante, al señalar el dispositivo constitucional de alusión en su composición normativa anterior que la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, lo primero que se advierte es que siempre ha existido la «Ciudad de México» y que antes era, además, formal y materialmente el Distrito Federal, esto es, el “Distrito de la Federación” a manera muy similar como lo es Washington, D. C. (District of Columbia) de los Estados Unidos de Norteamérica.² Por lo que dependía directamente de la Federación, sin que por tales motivos fuese un Estado de la Unión más, pero sí una «entidad federativa», un ente que conforma la Federación junto a los treinta y tres Estados de la República, por lo que siempre fue una parte integrante de la Federación.

Sin que pudiera tener una constitución propia, dada su naturaleza jurídico política del territorio donde se asientan los poderes federales, por lo que contaba con un documento político un tanto cuanto equivalente denominado “Estatuto de Gobierno del Distrito Federal” y el homólogo del titular del Poder Ejecutivo local no era un Gobernador como sucede con los estados de la República, sino un “Regente de la Ciudad”, primeramente, para después ser el Jefe de Gobierno del Departamento del Distrito Federal y, ulteriormente, con motivo de la reforma en estudio, de la Ciudad de México; cargo y denominación que persiste hoy en día.

Por otro lado, se desprende que el país no se llama “México”, como equívocamente se cree o suele utilizarse, sino Estados Unidos Mexicanos, pues México es uno de los Estados que conforman el Pacto Federal, una de las partes integrantes de la Federación (artículo 43), mal llamado “Estado de México” o por su acrónimo “Edo.-Méx.”; siendo la Ciudad de México –y no “CDMX”–, además del asiento de los Poderes de la Unión (Distrito Federal), la Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, del texto constitucional anterior a la reforma de trato, se aprecia que en el caso de que los poderes federales se llegaran a trasladar a otro lugar, la Ciudad de México se erigirá en el Estado del Valle de México, por lo que prima facie adquiriría la calidad de un Estado de la Unión más, perdiendo su carácter de “Distrito Federal” y, por tanto, se infiere que el estado de la República en el que se mudaran los Poderes de la Unión, se convertiría en el nuevo Distrito Federal, dejando de ser estado.

Ahora, aunque la regla superior sea un tanto vaga en su literalidad al indicar “otro lugar”, no puede ser más que cualquiera de los treinta y tres Estados de la Unión que conforman el territorio nacional y las partes integrantes de la Federación, conforme a lo previsto por el numeral 43 del Cuerpo Político Fundamental; sin embargo, en el texto vigente en forma alguna se establece qué sucederá en dicho supuesto de traslado de los poderes federales, en el entendido de establecer cuál va a ser la consecuencia lógico-jurídica al actualizarse la regla en mención, esto es, regular la situación concreta, precisar sus alcances.

Al respecto, el precepto constitucional (vigente) de marras, a la letra dispone: “Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México”.

² Washington D. C. es la capital de Estados Unidos de Norteamérica (ciudad compacta junto al río Potomac, que bordea los estados de Maryland y Virginia) que, además de caracterizarse por sus imponentes monumentos y edificios neoclásicos, alberga las 3 ramas del gobierno federal: el Capitolio (Congreso: Poder Legislativo), la Casa Blanca (residencia del Poder Ejecutivo: Presidente de la República) y la Corte Suprema (Poder Judicial).

Conforme a la redacción vigente del dispositivo fundamental en estudio, puede advertirse que prácticamente se sustituyó el término “Distrito Federal” por el de “entidad federativa”, en su primera parte; más adelante, se estableció que en el supuesto de traslado de los poderes federales a otro lugar, la Ciudad de México se instituirá como un Estado de la Unión y, en suma, se suplantó la denominación del “Estado del Valle de México” que anteriormente preveía el dispositivo constitucional por el de Estado de la Ciudad de México.

Es decir, que en el caso de que los Poderes de la Unión se mudaren de residencia conforme al precepto fundamental que se haya en vigor, la Ciudad de México se convertirá en el Estado de la Ciudad de México, empero –se entiende– seguirá siendo la “Ciudad de México” o al menos la capital del Estado que lleve el mismo nombre, al tiempo que también será la de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo hasta aquí expuesto, se colige que desde la promulgación y entrada en vigor de la Constitución de 1917, la Ciudad de México ha fungido con un doble carácter, por un lado, como Distrito Federal, esto es, la sede de los Poderes de la Unión y, por otro, como Capital de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que al contar con un territorio determinado, una población, un orden jurídico y un gobierno, era una entidad federativa con su propia conformación jurídico política, junto con las diversas treinta y una.

Sin que se soslaye el hecho de que, si bien es cierto, dicha entidad federativa al ser el Distrito de la Federación, presupuestariamente dependía directamente de ésta –lo que ya no acontece dada su autonomía constitucional–, no menos verídico resulta ser que la naturaleza primigenia del Distrito Federal desde la Constitución federal de 1824 era ésa justamente, la de constituirse como el territorio donde quedaran

asentados los poderes federales³; sede que por múltiples razones de carácter político, económico y social correspondió a la Ciudad de México, por lo que el Distrito Federal surgió como un caso *sui generis* que hasta hace un lustro figuraba en nuestro sistema jurídico.⁴

Sobre el particular, es prolijo resaltar que la intención –liberal, vale decir– del Poder Constituyente en 1823⁵ fue precisamente la de terminar con el régimen monárquico que imperaba en ese tiempo y la difícil e inestable situación por la que atravesaba el país, estableciendo la primera Constitución de corte federal, cuya proclamación fue el 4 de octubre de 1824, destacando la creación de un Estado nación soberano, al ejercerse el poder conforme a las leyes y en las instituciones creadas por la nación titular de la soberanía, sentando los poderes federales en un territorio destinado para tal efecto. De tal suerte, que el Distrito Federal se estableció con los límites de la Ciudad de México, mediante Decreto de 18 de noviembre de 1824, a través del cual se establecieron diversos puntos, destacando: “El lugar que servirá de residencia a los Supremos Poderes de la Federación, conforme a la facultad 28 del artículo 50 de la Constitución, será la Ciudad de México”.

Ahora, las entidades federativas tienen intervención en el procedimiento legislativo federal y en el procedimiento de reforma constitucional, pues conforme al artículo 71, fracción III, de la Norma Suprema, el derecho de iniciar leyes o decretos compete a las legislaturas de los Estados y atento a lo provisto por el diverso 120, del mismo Cuerpo Político Fundamental, los gobernadores locales deben publicar y hacer cumplir las leyes federales; sin embargo, en términos del artículo 135 constitucional y, precedentemente a la multicitada modificación del 2016, el Distrito Federal no participaba en el procedimiento de reforma

3 La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824, ordenaba en su artículo 50, facultad 28: “Art. 50. Las facultades exclusivas del Congreso general son las siguientes: 1ª a 27ª (...) 28ª. Elegir un lugar que sirva de residencia á los supremos poderes de la federación, y ejercer en su distrito las atribuciones de poder legislativo de un estado [sic]”.

4 Antes de 1993, todo lo relacionado al Distrito Federal era competencia del Congreso de la Unión en funciones de “órgano legislativo local”, aunque a partir del referido año la Constitución Federal introdujo un órgano representativo propio para dicho territorio, la Asamblea Legislativa; alterando de esa forma el reparto competencial hasta entonces vigente, mismo que fue reformado en 1996. Así, el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, de la Carta Magna, vigente hasta la reforma del 2016, enlistaba las materias sobre las cuales podía legislar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esto es, un órgano legislativo “doble”, uno con carácter federal compuesto por representantes electos en todo el territorio nacional y otro local, integrado por el voto de los ciudadanos del Distrito Federal; a pesar de ello, a la fecha, la Ciudad de México posee, además de un ejecutivo y un judicial, un Poder Legislativo, un Congreso propio, dotado de autonomía derivado del hecho de que, a raíz de la reforma constitucional del 2016, su gobierno queda a cargo de sus poderes locales.

5 Reflejo de la entonces directa influencia norteamericana con su Constitución de 1789, así como mediata de los grandes pensadores ingleses y franceses como Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Sieyès, entre otros, derivado de la postura estadista y doctrina liberal de finales del siglo XVIII, aterrizando en un Cuerpo Político Fundamental los conceptos de soberanía y federalismo.

constitucional, aunque la Ciudad de México actualmente ya tiene cabida de participación en el mecanismo de reforma constitucional, lo que conlleva a que se le equipare —como se ha venido mencionando— como un “Estado” más de la Unión, cuenta habida que esa prerrogativa estaba destinada a las legislaturas de los Estados, aunque la todavía sede de los poderes federales siga siendo una entidad federativa —valga la expresión— ‘corregida y aumentada’.

Así las cosas, la figura del Distrito Federal se vislumbra desde un aspecto formal o *de jure* y otro material o *de facto*, desde su inclusión en la Constitución de 1824, pasando por la diversa de 1857 y perdurando incluso en la vigente de 1917, hasta la reforma de 2016 aludida y, desprendiéndose del hecho de que en el territorio de la Ciudad de México se encuentran asentados los Poderes Federales, respectivamente; poniendo en evidencia que se ha tenido una incorrecta apreciación o, más bien, una incompleta idea de lo que el Distrito Federal propiamente significa, partiendo del doble carácter o la función dual de la Ciudad de México, como ya se ha expuesto: no sólo como Capital del país, sino como Sede de los Poderes de la Unión, fácticamente hablando.

Bajo ese orden y, tomando en consideración que en el territorio que actualmente ocupa la Ciudad de México continúan asentados los Poderes de la Unión, de facto y materialmente, se puede afirmar válidamente que sigue latente la figura del Distrito Federal y, por tanto, es fuerza concluir que debe existir una regulación eficiente del artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones expuestas, principalmente en el supuesto de traslado de los Poderes Federales a un Estado de la República, a efecto de establecer cuál va a ser la consecuencia lógico-jurídica al actualizarse la regla superior en mención, determinar la situación concreta, así como precisar sus alcances en el ámbito espacial de validez de la norma constitucional e incluso legal.



ecex
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

CDMX
VERACRUZ

Especialízate en

Tráfico de Mercancías y Tramitación Aduanal

Av. Municipio Libre #103 Col. Portales,
Alc. Benito Juárez. C.P. 03300, México, CDMX
(55) 5998 8186 - 5575 9840 - 5672 2020 - 52430290



MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LA MEDIACIÓN Y LA CONCILIACIÓN EN MATERIA FAMILIAR

Lic. Catalina Mondragón Bibiano

Licenciada en Derecho por la UABC, abogada postulante.

Este trabajo tiene como finalidad exponer si los medios alternos de solución de controversias, especialmente la mediación y conciliación en materia familiar, pueden ser eficaces en casos de existir violencia familiar.

El acceso a los medios alternativos de justicia constituye un derecho humano, su fundamento principal se encuentra en el artículo 17, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente: “(...) Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial (...)”.¹

Atendiendo a este derecho humano, el acceso a los MASC² goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado³, siempre y cuando estén previstos por la ley. De modo que éstos son una garantía de acceso a una justicia pronta y expedita para los ciudadanos. Cabe señalar que, en el caso de que las partes que están en conflicto elijan un medio alternativo para solucionarlo, de naturaleza civil, atiende a uno de los principios rectores de los MASC el de la autonomía de la voluntad.

A continuación, se mencionarán los conceptos de las siguientes palabras, las cuales son de re-

levancia en el desarrollo del artículo.

Vado Grajales, define Mediación como: “El procedimiento en el cual dos partes de un conflicto se reúnen con un tercero, ajeno e imparcial, que facilita la comunicación entre aquellas para que puedan delimitar el conflicto y encontrar solución. El tercero no hace propuestas de arreglos”.⁴

Por otro lado, el autor en referencia define a la Conciliación como: “Es un procedimiento en el cual dos partes de un conflicto se reúnen con un tercero, ajeno e imparcial, que facilita la comunicación entre las personas enfrentadas para delimitar y solucionar el conflicto, y que además formula propuestas de solución”.

A *grosso modo*, atendiendo a los contextos familiares, podemos decir que la mediación constituye un proceso extrajudicial de resolución y manejo del conflicto, las partes con la asistencia de una persona neutral llamada mediador, intentan aislar los desacuerdos de forma sistemática: exploran alternativas y consideran compromisos con el propósito de alcanzar un convenio sobre los distintos aspectos de su separación o divorcio, buscando el beneficio de cada uno de los miembros de la familia, y en particular el de los menores de edad e incapaces.

Igualmente, las partes tienen la responsabilidad de tomar sus propias decisiones en relación con su

1 Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

2 Medios Alternos de Solución de Controversias.

3 Época: Décima Época, Registro: 2004630, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: III.2o.C.6 K (10a.), Página: 1723.

4 VADO GRAJALES, Luis Octavio, *Medios alternativos de resolución de conflictos*, p. 379.

proyecto de vida, simultáneamente los consortes se preparan para su separación y a preservar sus deberes, derechos y obligaciones, permitiendo la sana convivencia con sus hijos (as). El propósito de la mediación no es cambiar la decisión de separación o divorcio, sino más bien permitir a la pareja hacerlo de una manera menos dolorosa, eliminando sus diferencias.

En el Reglamento interno del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México⁵, en el artículo 34 se mencionan los casos en los que procede la mediación. En suma, todas las controversias que deriven de relaciones entre parejas, tengan hijos en común, o personas unidas por algún tipo de parentesco, las que surjan de esas relaciones, así como las sucesiones.

Con respecto a la conciliación, debemos decir que se trata de un mecanismo legal, por lo general de orden judicial, ya que existen algunas excepciones, siendo una de ellas, precisamente, la contemplada en la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia Familiar del Distrito Federal que establece un procedimiento de conciliación de carácter administrativo.

Respecto a este mecanismo, a través del cual una persona llamada conciliador, con profesión de licenciado en Derecho, prepara y propone a las partes alternativas de solución al conflicto y, en caso de que los interesados lleguen a un convenio el juez lo aprueba de plano.

Esto es, la conciliación, a diferencia de la mediación, presupone un proceso judicial, siempre ante un licenciado en Derecho, donde en la audiencia previa y de conciliación⁶, o en cualquier momento del proceso, antes de que se dicte sentencia definitiva, salvo en los casos que no lo permita la ley, las partes pueden resolver o dirimir sus diferencias.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia⁷, en el artículo 7 nos da una defini-

ción sobre qué es la violencia familiar: “comete violencia aquel que ejerce un acto de poder u omisión intencional, para someter, dominar, controlar, agredir con violencia de cualquier tipo, dentro o fuera del domicilio familiar, a otra persona con la que tiene una relación familiar”.

Bajo este contexto, cabe la posibilidad de cuestionar ¿Será prudente prohibir los MASC en casos de violencia familiar? Partiendo de la siguiente hipótesis, debido a la relación que guardan las partes, uno sería el agresor y el otro la víctima, por el sometimiento de esta última, acarreado como consecuencia la imposibilidad de la libre voluntad; por lo cual se ha considerado que resulta completamente erróneo acudir a la mediación y a la conciliación, ya que las partes no están en igualdad de circunstancias. Por consiguiente, la víctima puede tomar decisiones o acuerdos obligados, por sentirse intimidada, por temor de que su agresor cumpla con alguna amenaza que le haya impuesto.

No obstante, a pesar del rechazo a estos mecanismos en los conflictos de violencia familiar, éstos se encuentran regulados en diversos ordenamientos jurídicos a nivel mundial, de ahí que en México en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 8 fracción IV, ordena: “(...) evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima (...)”.

De manera análoga, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en el artículo 205 párrafo segundo, dispone: “El Centro de Justicia Alternativa atenderá a las partes siempre y cuando no exista violencia familiar, en cuyo caso se abstendrá de intervenir, haciéndolo del conocimiento al C. Agente del Ministerio Público tratándose de menores (...)”.

Ahora veamos la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar⁸, que establece un marco jurídico en los artículos 18, 19 y 21 que permite comenzar

5 Disponible en: http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/cja/wp-content/uploads/Rgmto-Interno-CJA-del-TSJCDMX-Acdo-23-23_2016.pdf

6 Fundamento en el artículo 55, párrafo segundo, 272 A y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

7 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf

8 Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65597/31/1/0

objetivamente a prevenir, sancionar y erradicar los tipos de violencia, los cuales se han hecho referencia mediante la elaboración de mecanismos técnicos especializados, como el tratamiento psicológico. Por otra parte, mediante estos mecanismos de solución y las características de los procedimientos, tienen la finalidad de facilitar a la familia y a sus integrantes la pertinencia de mantener el vínculo familiar en aras de proteger su salud física y emocional.

Sin embargo, hay una tarea importante de los servidores públicos que trabajan con estos mecanismos, no sólo luchar contra la violencia familiar, sino más bien, garantizar plenamente que a los receptores de violencia les brindarán la atención más completa posible, la cual será prestada por personal acreditado, profesionalizado y especializado, que representará seguridad y garantía para la salud de las víctimas.

Avanzando en nuestro razonamiento, el concepto de violencia familiar es tan amplio y subjetivo, de infinidad de conductas, ya sean de acción u omisión, podrían ser contrarias a nuestra forma de ser, pensar y sentir, por ende, deberán encuadrarse en una hipótesis normativa para colarse en el supuesto. Otra particularidad es que no todas las personas acuden a los tribunales a demandar si no hasta que el ambiente se torna insoportable.

Siendo congruentes, los divorcios por ponerlo como ejemplo, llevan aparejada una conducta que pudo haber sido ofensiva a tal grado que es imposible la vida en común. Por otra parte, existen casos en los que las personas que sufren de violencia familiar no lo externan y aun así acuden a conciliar o mediar.

Lo más importante será la aptitud del mediador o conciliador, en detectar actitudes y reacciones de las partes, prevenir o neutralizar el estallido de violencia, así como evitar la sumisión inexplicable de la víctima que podría estar cediendo a todas las pretensiones del posible generador de violencia. Ante tal eventualidad deberá suspenderse el procedimiento y solicitar que se les brinde ayuda psicológica a las partes para que superen la crisis emocional, para que después se encuentren con mejor disposición de restablecer la sana comunicación y de continuar o no con el mecanismo.

Finalmente, no se trata sólo de evitar la violencia familiar, sino más bien detectarla y, en caso afirmativo, terminar con el procedimiento, ya que el derecho penal es la única vía para ventilar esos conflictos de violencia familiar.



"Lo que
hacemos juntos
es lo que
nos distingue"

CONOCE NUESTRA OFERTA ACADÉMICA

LICENCIATURA

LICENCIATURA EN DERECHO
RVOE: 20211348

LICENCIATURA EN VISTA ADUANAL Y
COMERCIO EXTERIOR
RVOE: 20220305

ECEX

TRÁFICO DE MERCANCÍAS
Y TRAMITACIÓN ADUANAL

18FT234 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2018

MAESTRÍAS

MAESTRÍA EN SISTEMA ACUSATORIO Y
JUICIOS PENALES ORALES
RVOE: 20150061

MAESTRÍA EN DERECHO ADUANERO Y
DERECHO DE COMERCIO EXTERIOR
RVOE: 20150103

MAESTRÍA DERECHO CIVIL Y FAMILIAR
RVOE: 20181226

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
RVOE: 20150104

MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL Y
ADMINISTRATIVO
RVOE: 20121644

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA E HISTORIA
RVOE: 20220304

MAESTRÍA EN DERECHO MARÍTIMO Y
DERECHO PORTUARIO
RVOE: 20220306

DOCTORADOS

DOCTORADO EN DERECHO
RVOE: 20130002

DOCTORADO EN DERECHO ADUANERO
Y DERECHO DE COMERCIO EXTERIOR
RVOE: 20192323

DOCTORADO EN DERECHO
FISCAL

DIPLOMADOS EN LÍNEA

DIPLOMADO EN DERECHO ADUANERO
DIPLOMADO EN ISR PERSONAS FÍSICAS
DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y
AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DIPLOMADO EN JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL Y RECURSO
DE REVOCACIÓN

CERTIFICACIÓN

EXAMEN ÚNICO DE BACHILLERATO
EXAMEN ÚNICO DE SECUNDARIA



CAMPUS | BAJA CALIFORNIA
(664) 200 2770
(664) 684 2303

CAMPUS | VERACRUZ
229 3753 434
229 37 52 431

CAMPUS CENTRAL | CDMX
555575 9840
555672 2020

WhatsApp
55 1081 5944 - 55 8202 9064 - 55 3964 7158 - 56 2669 6344 - 55 8202 5967



EL ACCESO A LAS TIC COMO DERECHO HUMANO Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN ACTUAL

1. Mtro. Jorge Luis Barrera Vergara y,
2. Mtra. María del Pilar Bolaños Rebollo

1. Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Procesal Penal. Doctorante en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, con diplomado en Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación por la Universidad Iberoamericana. Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa. Correo electrónico: jorge.barrera.vergara@correo.cjf.gob.mx

2. Licenciada en Derecho por la UNAM y Maestra en Competencia Constitucional y Ordinaria por el Instituto de la Judicatura Federal. Magistrada de Circuito, adscrita al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Ante el contexto social originado por la contingencia provocada por el virus COVID-19, el Estado Mexicano a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación –en adelante TIC-, se ha preocupado por establecer los mecanismos para dar continuidad a uno de los pilares fundamentales de la sociedad: la educación, misma que es de vital importancia para el desarrollo óptimo de las futuras generaciones, quienes eventualmente podrían padecer los estragos vinculados con la falta de acceso a las mismas generando así una transgresión a los derechos humanos de los sectores más segregados de nuestro país.

Como punto de partida, podemos establecer que, en la Declaración de Principios de Ginebra, de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información¹, fundamentalmente se instituyó que las TIC son un instrumento eficaz para mejorar la calidad de vida de todos y que, además, pueden promover el diálogo entre las personas, las naciones y las civilizaciones. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha manifestado reiteradamente la importancia de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) modernas entre otros, en la educación.

¿Pero qué podemos entender por TIC?, para responder dicha cuestión es dable destacar que en la *Revista Digital Universitaria* de la UNAM, se estableció que las Tecnologías de la Información y Comunicación son: “las múltiples herramientas tecnológicas dedicadas a almacenar, procesar y transmitir información, haciendo que ésta se manifieste en sus tres formas conocidas: texto, imágenes y audio”.² Así, podemos establecer que las TIC son las herramientas tanto físicas, como virtuales que facilitan el proceso de comunicación y aprendizaje entre los individuos.

Ahora bien, para poder decir que las TIC constituyen derechos humanos, debemos traer a contexto el origen de su vinculación con estos últimos, para ello tenemos que el veintiuno de diciembre de dos mil uno, la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución aprobada por la Asamblea General, en el quincuagésimo sexto período de sesiones, acordó celebrar la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información³ -misma que se llevó a cabo en dos fases la Cumbre de Ginebra de 2003, y la de Túnez de noviembre de 2005-, en la que se creó un vínculo respecto al derecho existente en la Declaración Universal de Derechos Humanos para con la

¹ Declaración de Principios de Ginebra, el cual puede ser consultado en el sitio web de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, disponible en: https://www.itu.int/net/wsis/documents/listing.asp?lang=es&c_event=sj1&c_type=o

² ZAMBRANO MARTÍNEZ, Fernando, “Las TICs en nuestro ámbito social”, *Revista Digital Universitaria* de la UNAM, núm. 11, vol. 10, noviembre de 2009, disponible en: <http://www.revista.unam.mx/vol.10/num11/art79/int79.htm>

³ Información que fue obtenida de la resolución A/RES/56/183, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2001, disponible en: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/56/183>

sociedad de la información, esto es, el fomento, uso y explotación de las TIC, como una herramienta de conocimiento con el objetivo de lograr una óptima sociedad de la información.⁴

En lo que respecta a nuestro país, este derecho humano fue incluido con la reforma de once de junio de dos mil trece, en la cual el poder constituyente modificó el artículo 6° de la Constitución para circunscribir en su párrafo tercero la obligación para el Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet; asimismo, se añadió en el apartado B fracción I, el deber para el Estado de garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

Por lo que hace al cumplimiento de estos deberes a cargo del Estado Mexicano, es menester señalar que, si bien se han emitido diversas legislaciones para regular lo atinente a las TIC, lo cierto es que, por cuanto hace al derecho de acceso a las mismas, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones incluido el de banda ancha e internet, aún se tiene un camino largo por recorrer.

Lo anterior es así, pues acorde con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)⁵, sólo el 76.6% de la población urbana es usuaria de internet y, en lo que respecta a la zona rural, la población usuaria se ubica en 47.7%. Además, de los hogares del país, 44.3% dispone de computadora y 92.5% cuenta con al menos un televisor y, en lo que concierne al uso de celular, se estima que el país cuenta con 86.5 millones de usuarios de esta tecnología, lo que

representa el 75.1% de la población de seis años o más y que nueve de cada diez usuarios de teléfono celular disponen de un celular inteligente. Resultados que ponen de relieve un eventual incumplimiento de la obligación constitucional que adquirió el Estado con la reforma del año dos mil trece, ya que como se expuso con anterioridad, el artículo 6° de la Norma Fundamental es específico en establecer que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Por su parte, para conocer el impacto que tiene el acceso a las TIC en el derecho a la educación, es pertinente destacar que este último además de ser un derecho humano reconocido tanto por la Constitución como por instrumentos internacionales, funge como base fundamental para el desarrollo económico y social del país, al dotar de conocimientos básicos y específicos a la población en desarrollo para cumplir dichos objetivos⁶, siendo precisamente las TIC las herramientas que han cobrado suma relevancia actualmente, dado el panorama generado por la pandemia que impide a los alumnos acudir a las aulas de manera presencial. Luego, la vinculación entre uno y otro derecho humano radica en que la finalidad que tiene la educación es difundir los conocimientos entre los individuos, conjugándose perfectamente con uno de los fines de las TIC que es la de transmitir información a través de los medios electrónicos.

Así, podemos referir que atendiendo a la realidad que impera actualmente en nuestro país, para ejercer plenamente el derecho a la educación es necesario contar con un efectivo acceso a las TIC, puesto que la enseñanza ha transmutado de ser presencial a ser completamente a distancia y digital. Sin embargo, como se puso de relieve con los resultados de la encuesta anteriormente aludida, aún queda un sector de la población que no tiene acceso a los recursos tecnológicos necesarios para poder continuar con el proceso educativo implementado por el Estado, dicho impedimento se conoce

4 Revista N° 44 del Instituto de la Judicatura Federal disponible en: https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/Rev44_C.html

5 Datos obtenidos del comunicado de prensa 103/20, de 17 de febrero del 2020, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/ENDUTIH_2019.pdf

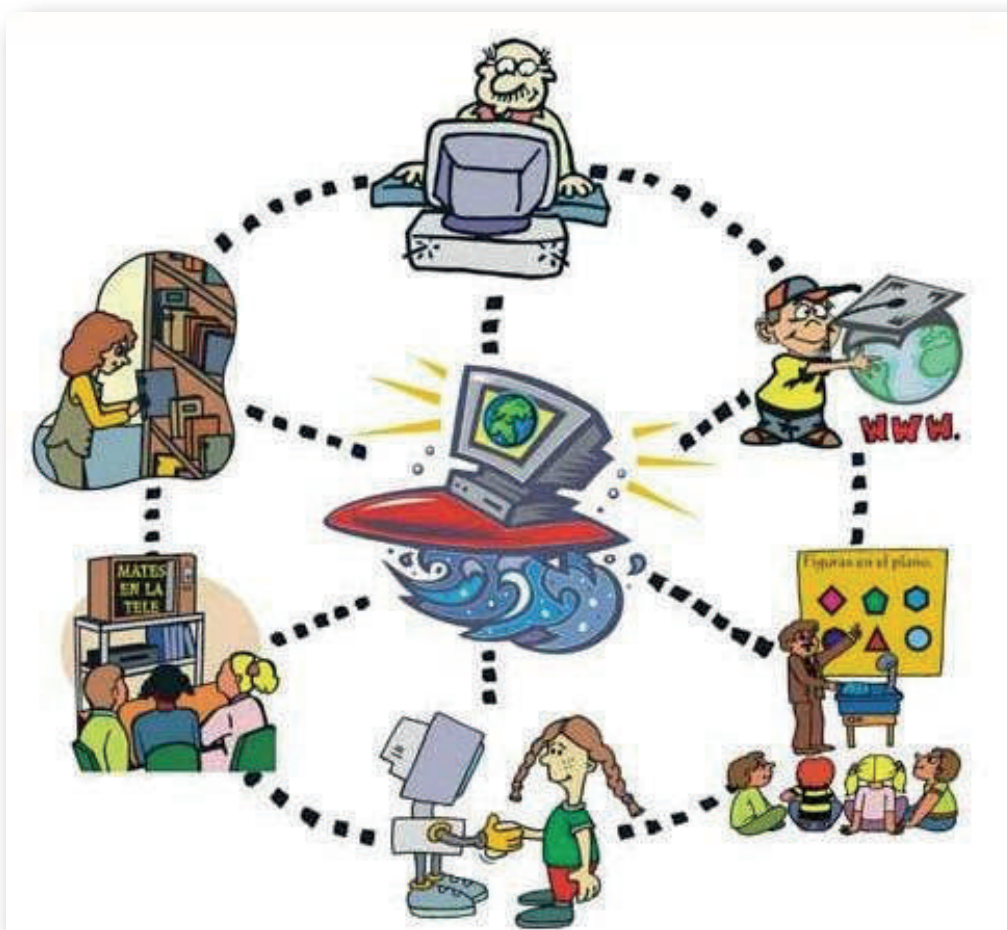
6 Revista N° 44 del Instituto de la Judicatura Federal disponible en: https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/Rev44_C.html

7 Final list of participants, de la Fase de Ginebra de la CMSI, y Second Phase of the WSIS Final list of participants, consultables en el sitio web de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, disponibles en: https://www.itu.int/net/wsisis/documents/doc_single.asp?lang=es&id=1108 https://www.itu.int/net/wsisis/documents/doc_multi.asp?lang=es&id=2294|0

como brecha social, pues el factor económico sigue obstaculizando a los sectores más segregados de la sociedad para acceder a las mencionadas TIC, impactando directamente el acceso a la educación, pilar fundamental de cualquier sociedad.

Corolario a lo anterior, el Estado debe velar para que la brecha social decrezca a través de la implementación de políticas sociales más efectivas e inclusivas y, así la población pueda tener pleno acceso a las TIC, pues sólo de esa forma toda la ciudadanía podrá ejercer plenamente el derecho humano a la educación, ya que acorde con la encuesta señalada previamente, un 23.4

por ciento de la población urbana y un 52.3 por ciento de la población rural aún no cuentan con acceso a internet, además, que sólo un 44.3 por ciento dispone de computadora y 92.5 por ciento cuenta con televisor, siendo que en ninguno de los rubros señalados se ha llegado a la totalidad de la población. El no hacerlo así implica un eventual incumplimiento a los deberes impuestos al Estado con la reforma al artículo 6° Constitucional del dos mil trece y, a su vez, a los compromisos internacionales asumidos en las dos fases de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información -en las cuales, cabe destacar México tuvo participación-.⁷



⁷ Final list of participants, de la Fase de Ginebra de la CMSI, y Second Phase of the WSIS Final list of participants, consultables en el sitio web de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, disponibles en: https://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_single.asp?lang=es&id=1108 https://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=es&id=2294

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MÉXICO Y SU RELACIÓN CON EL CICLO PRESUPUESTARIO

Diego Alfonso Vázquez Pérez

Tesista en la Facultad de Derecho de la UNAM. Estudiante de Contaduría y Finanzas Pública del IPN, consultor de normatividad financiera y regulaciones administrativas para empresas paraestatales en el Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., socio fundador del despacho jurídico Barrera Solana Vázquez y Asociados.



El ejercicio del poder político históricamente ha traído consigo la imposición de directrices administrativas por parte de un individuo o de un grupo de personas con la influencia de las ideologías de cada persona que llega al poder. La ideología política moldea a la administración pública; es como un fluido que permea todas las áreas de la misma; mientras que un gobierno de corte liberal puede decidir sobre dar mayor libertad fiscal y administrativa a las empresas para incentivar el libre mercado, un gobierno de corte social de derecho, puede generar barreras prudentes en materia fiscal y administrativa para tener un mercado con mayores regulaciones que funcione a favor de principios como la equidad en el ingreso, acceso al mismo para todas las personas y control de competencia de las empresas nacionales con las internacionales.

En los sistemas políticos democráticos, en todas sus vertientes, los jefes de gobierno son los que llevan (en algunos casos, acompañados del jefe de estado) la dirección de la administración pública; la naturaleza de estos sistemas políticos exige la elección temporal de los jefes de gobierno, quienes para poder ocupar un cargo público generan discursos políticos en los cuales señalan desde su punto de vista los problemas por los que transita su país, así como cuáles son las virtudes de sus propuestas para generar un impacto positivo en la administración pública.

En el sistema político democrático la identificación de los problemas corre principalmente por el ejecutivo

federal; existen instrumentos democráticos de participación ciudadana que permiten a los ciudadanos de un país exponer los problemas que acontecen en la nación. En el caso de México, el ejecutivo federal puede exponer los problemas que identifica (o identificó antes de tomar el cargo) por medio del Plan Nacional de Desarrollo, mientras que el pueblo puede hacerlo mediante sus representantes (diputados y senadores) en las cámaras del Congreso de la Unión, las cuales generan dicha identificación mediante el análisis legislativo, las discusiones y las propuestas de ley; aunque la población puede participar si así lo decide de forma directa, mediante la asamblea popular, el diálogo colaborativo, la iniciativa ciudadana, entre otros.

Una vez identificados los problemas, es responsabilidad del ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones llevar a cabo las acciones necesarias para resolverlos; estas acciones, así como su contenido es lo que entendemos como política pública, Corinne Larrue da una definición suficiente de lo que entendemos por ésta:

[...], una política pública se define como una concatenación de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y ocasionalmente privados cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían, a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo.¹

¹ KNOEPFEL, Peter, *et al.*, "Hacia un modelo de análisis de políticas públicas operativo. Un enfoque basado en los actores, sus recursos y las instituciones." en *Ciencia política* n° 3, enero-junio 2007, p. 11.

En dicha definición, se identifican ciertos elementos relativos a la política pública:

¿QUÉ ES?

[...] una concatenación de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes [...].

¿QUIÉN LA EJERCE?

[...] diferentes actores, públicos y ocasionalmente privados cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían [...].

¿PARA QUÉ?

[...] a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo.

La política pública cuenta con dos momentos: uno normativo y uno operativo.² El momento normativo hace referencia a la finalidad de la política pública (éste se va a establecer en el Plan Nacional de Desarrollo); mientras que el operativo hace referencia al instrumento mediante el cual se lleva a cabo la misma, en el caso de México, el programa gubernamental.

El momento operativo de las políticas públicas viene acompañado del ejercicio del gasto. Para poder generar las acciones necesarias para la solución de un problema que afronte en un momento dado un Estado es necesario el ejercicio de recursos humanos, tecnológicos, materiales y por supuesto financieros; los cuales devienen del presupuesto federal y su ejercicio.

El gasto público es el ejercicio de los recursos públicos por parte de cada uno de los poderes del país devengados para la consecución de los programas gubernamentales que cada uno genere con la finali-

dad de solucionar los problemas que atañen al Estado y a sus habitantes; el gasto público tiene un proceso técnico en México llamado ciclo presupuestario, el cual va de la mano con la ejecución de las políticas públicas, lo cual conforma parte del momento operativo de las mismas.

Para entender el ciclo presupuestario, debemos de entender sus etapas, las cuales serán descritas en la siguiente tabla³:

ETAPA 1. PLANEACIÓN

DESCRIPCIÓN

La planeación es justamente el momento normativo de las políticas públicas. En la planeación se establecen los objetivos del gobierno en turno, así también se plasma la problemática descrita por el ejecutivo acompañada de las soluciones (los programas sociales) que se proponen para erradicar estas mismas.

ETAPA 2. PROGRAMACIÓN

DESCRIPCIÓN

La programación consta en la definición de los programas gubernamentales (y su presupuesto) que llevarán a ejecución las instituciones de la administración pública. Para esto se debe de generar una proyección de los ingresos del periodo de ejercicio presupuestal (esto mediante la formulada Iniciativa de Ley de Ingresos), así como la propuesta del ejercicio de estos mismos (esto mediante el Proyecto de Presupuesto de Egresos); la conjunción de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos es llamada en México "Paquete Económico", el cual se entrega a los poderes legislativos para su discusión y aprobación.

² ARIAS, Daniela y Hugo Herrera, *Políticas Públicas: Base conceptual, orientaciones y etapas*, INAP A.C., 2012, p. 47.

³ SHCP, *Presupuesto Basado en Resultados*, 2017. Sitio web: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/ProcesoPBR.aspx

ETAPA 3. PRESUPUESTACIÓN

DESCRIPCIÓN

La presupuestación consta de la formulación, corrección y aprobación del paquete económico, para la expedición de la Ley de Ingresos periódica y el Presupuesto de Egresos periódico correspondientes, los cuales contarán con el carácter normativamente vinculante respecto de la legislación federal o local.

ETAPA 4. EJERCICIO Y CONTROL

DESCRIPCIÓN

Una vez que contamos con nuestra Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos aprobados, se da el ejercicio del presupuesto, los cuales son ejecutados mediante los programas sociales que a su vez tienen una metodología particular establecida en su Matriz de Indicadores para Resultados, la cual es la herramienta de planeación estratégica que resume los objetivos de un programa presupuestario y su alineación con la planeación nacional.⁴ El control se da por medio del Índice de Seguimiento al Desempeño establecido en la misma MIR, el cual genera valoraciones cuantitativas y cualitativas respecto del ejercicio del programa.

ETAPA 5. SEGUIMIENTO

DESCRIPCIÓN

El seguimiento lo genera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante las Matrices de Indicadores para Resultados, entregadas por cada dependencia gubernamental que se encuentra en ejecución de programas gubernamentales. Una herramienta muy útil de seguimiento es el Observatorio de Gasto de Transparencia Presupuestaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ETAPA 6. EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

La evaluación refiere al análisis del ejercicio de gasto que generan calificadoras externas (públicas como el CONEVAL, o privadas como consultoras y calificadoras), para mantener la objetividad y la pertinencia, eficacia e integridad que se tuvo del ejercicio de recursos públicos.

ETAPA 7. RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIPCIÓN

Es la última etapa del ciclo presupuestario, aquí cada dependencia entrega los resultados de su ejercicio; por lo general se acompaña de una auditoría en la cual se vigila el gasto y, posteriormente se procede a aplicar las sanciones necesarias en caso de existir.

Parte importante de este ciclo, que a su vez es un mecanismo operativo de las políticas públicas, es el tema de la evaluación y el control. En México tenemos distintas organizaciones que vigilan el cumplimiento de las políticas públicas; en cuanto a la evaluación de la política de desarrollo social, tenemos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el cual es un órgano constitucional autónomo, mientras que la política económica es regulada directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el Programa Anual de Evaluación (en coordinación con el CONEVAL) y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Una herramienta muy útil para la evaluación de las políticas públicas es el Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual además es una herramienta de transparencia y acceso a la información pública. Dicho sistema, tiene sus disposiciones generales en

⁴ CONEVAL, Matriz de Indicadores para Resultados, 2022.. Sitio web: <https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/mir/mir.aspx>

los artículos 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 110.- La Secretaría (SHCP) realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados.

[...]

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley.

La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente:

I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables;

[...]

III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas;

[...]

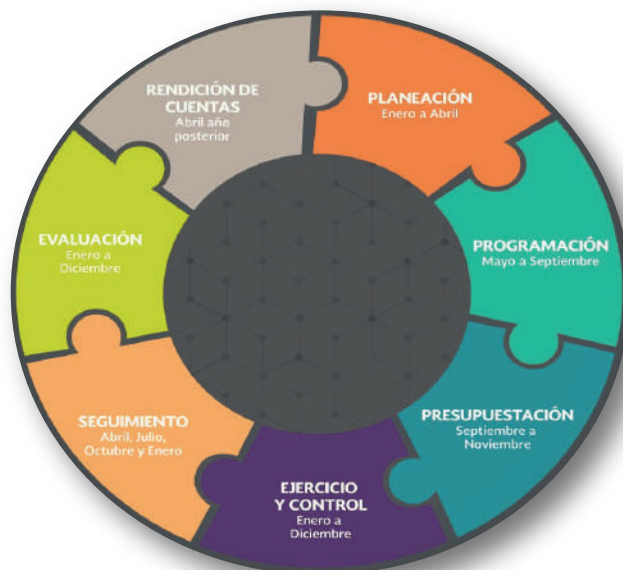
Artículo 111.- La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presump-

tos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas.

[...]

En dicha ley queda establecida la periodicidad de la evaluación de políticas públicas (trimestral), el papel del CONEVAL como evaluador de la política de desarrollo social de acuerdo a sus disposiciones, los requisitos de la evaluación del desempeño de los programas gubernamentales (la evaluación de la parte operativa de la política pública), entre otros requisitos importantes para la correcta evaluación de estas mismas.

Las políticas públicas en México van de la mano con el ejercicio del gasto público debido a que la vigilancia del ciclo presupuestario tiene una doble función, tanto de rendición de cuentas como de evaluación de las mismas. Gracias a los instrumentos de transparencia y acceso a la información pública podemos ver de forma tangible el desarrollo de éstas y evaluar desde un punto de vista ciudadano el actuar del gobierno y el uso de los recursos del erario público.





DACIS

SOLUCIONES
AGENCIA ADUANAL
ALMACENAJE
AUTOTRANSPORTES



contacto@dacis.mx
(55) 5341 4041 | (55) 6650 6454

 **www.dacis.com.mx**

Begonias #18, Col Clavería, Alcaldía Azcapotzalco,
CDMX C.P. 02080.